

Huila:

Análisis de la conflictividad

© FOTO SIMONE BRUNO



Área de paz,
desarrollo y
reconciliación



P N
U D

Colombia

Bruno Moro
Representante Residente - PNUD

María del Carmen Sacasa
Directora de País A.I.

Elaborado por
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Alessandro Preti
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Olga González Reyes
Astrid Elena Villegas
Unidad de Análisis

Alfonso de Colsa
Paola Enriquez
Oficina territorial de Huila

Reconocimiento especial
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD,
Nueva York (BCPR, por su sigla en inglés)

Agradecimientos

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Asociación Cultural y Ambiental del Sur. Consejo Regional Indígena del Huila. Programa de Consultorios Jurídicos de Víctimas del Conflicto Armado. Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos. Corporación Caguán Vive. Mujeres Víctimas de la Violencia Unidas por la Paz. VIUNPA. Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado regional Huila. Corporación Casa de la Memoria. Corporación de Desarrollo y Paz, HUIPAZ. Defensoría Regional del Pueblo. Secretaría de Gobierno departamental. Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila. Personería Municipal de Neiva. Consejo Municipal de Paz de Garzón. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Meta, OACNUDH. Oficina Territorial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.

Diseño, impresión y acabados
Impresol PBX: 2508244
www.impresolediciones.com

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva, ni los Estados miembros.

Junio de 2010

►►►► El análisis que se presenta a continuación se apoyó en entrevistas realizadas en terreno a representantes de instituciones del Estado; líderes sociales, de organizaciones y espacios de articulación social. También fueron de utilidad algunas investigaciones sobre la región, elaboradas por la academia y ciertos observatorios.

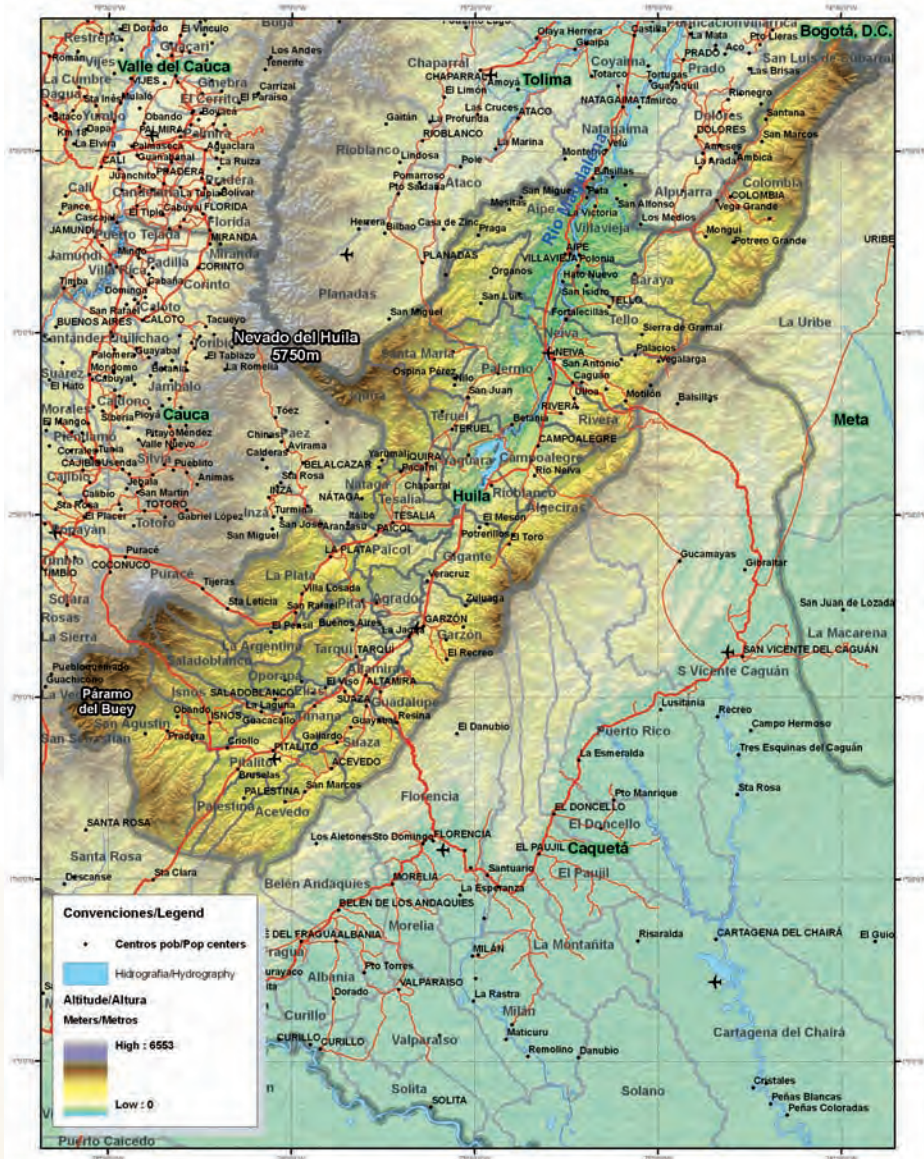
Su elaboración se basa en la metodología “Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto” (Conflict-related Development Analysis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.



Contenido

4	Antecedentes
5	Las causas estructurales y coyunturales de la conflictividad y sus actores
7	El problema de la tierra y la presencia de la guerrilla
9	Intensificación del conflicto
11	Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz
16	Situación actual y dinámicas
16	Situación social
23	Situación económica
26	Situación ambiental
29	Situación política y de gobernabilidad
35	Impacto del conflicto armado
45	Escenarios posibles y tendencias
45	Agudización del conflicto armado
51	Posible apertura de espacios de diálogos
51	Varios factores tienden a amenazar la gobernabilidad y la seguridad
55	Incremento de problemáticas en poblaciones de mayor vulnerabilidad
57	Aumentan exigencias de la víctimas y sus organizaciones por sus derechos
58	Incremento de la conflictividad y del impacto socioeconómico a raíz del nuevo modelo de desarrollo
59	Creciente interés en continuar con esfuerzos de construcción de paz, aumento de tensiones y riesgos
60	Identificación de caminos a seguir
60	Prevención y mitigación de efectos del conflicto
61	Transformación de conflictos y cultura de paz
62	Verdad, justicia, reparación y derechos humanos
65	Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
66	Desarrollo social económico sostenible para la paz

1. Antecedentes



Mapa OCHA

El departamento de Huila está localizado al suroriente del país, en la región andina; tiene una extensión de 19.900 kilómetros cuadrados, que representa el 1,8% de la superficie total de Colombia. Creado en abril de 1905, está conformado por 37 municipios: Neiva –la capital–, Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Villavieja y Yaguará.

En el departamento se distinguen el Macizo Colombiano –lugar donde se origina la cordillera Oriental y nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía–; las cordilleras Central y Oriental –en donde se destacan el valle del río Suaza y el páramo de Sumapaz–

y el Valle del río Magdalena, enmarcado por estas dos cordilleras que se bifurcan en el Macizo Colombiano.

El río Magdalena es el eje del sistema hidrográfico de Huila, en el que confluyen los numerosos ríos y quebradas que nacen en las divisorias de las cordilleras.

Huila cuenta con una población total de 1'011.418 habitantes, de los cuales el 59,5% (601.429) está localizado en la cabecera y el restante 40,5% (409.989) en la zona rural, según el censo de 2005. 508.068 son hombres (el 50,2%) y 503.350 son mujeres (49,8%).

En su mayoría, la población es mestiza y tiene su origen en la mezcla entre los indígenas que habitaban la región y los colonos españoles. Según el censo - 2005, el 1,05% de la población es indígena, el 1,17% afrocolombiana (existen 11.544 afrodescendientes) y el 97,7% no pertenece a un grupo étnico determinado.

En Huila se encuentran 14 resguardos y se localizan seis etnias: nasa-paez, gambianos-paez; yanacona; tama-paéz y pijao, ubicados en 10 municipios. También existen comunidades indígenas reconocidas ubicadas en los municipios de Santa María, San Agustín y Timaná, entre otros.

El departamento también se caracteriza por su variedad de climas y suelos que facilitan la diversidad y extensión de la producción ganadera y agrícola, aunque es la agricultura la actividad más importante del Huila.

Cuando los pobladores del Huila hablan de su territorio no solo se refieren al perímetro del departamento, ya que sienten y tienen una relación directa con los departamentos vecinos, en especial con Caquetá y Putumayo. Para ellos, todo hace parte de una misma región y, por eso, no es posible analizar Huila sin tener en cuenta las dinámicas de los vecinos. Los unen, entre otros aspectos, una misma historia, raíces culturales y, además, una evolución parecida del conflicto armado.

2. Las causas estructurales y coyunturales de la conflictividad y sus actores

La conflictividad del Huila y del Piedemonte Amazónico se explica por diversas causas estructurales y coyunturales de carácter socioeconómico, político y de seguridad, aunque su ubicación geoestratégica es también una de las razones de la presencia de diversos grupos armados ilegales y del conflicto armado.

Limita al norte con los departamentos de Meta, Cundinamarca y Tolima; al sur, con Cauca y Caquetá; al oriente, con Meta y Caquetá, y hacia el Occidente, con Cauca y Tolima. Por su ubicación, Huila permite conectar el centro con el sur del país; es la entrada hacia el sur de Colombia, es la vía de acceso a importantes zonas de riqueza y es el

“cruce de cuatro corredores estratégicos: el primero es el de Sumapaz, que comunica la región con los departamentos del Meta y Cundinamarca, y con Bogotá; el segundo es el de la Amazonia norte, que conecta la región con el noroccidente del Caquetá, Meta y la cuenca del Orinoco; el tercero es el de la Amazonia sur, que comunica al Huila con Caquetá, Cauca y Putumayo. Finalmente está el corredor del Pacífico, que comunica a este departamento con el Tolima, Valle y la región del Pacífico”¹.

A pesar de no ser un departamento con grandes dificultades de acceso a mercados importantes como Bogotá y de que sus características geográficas tampoco son complejas, exceptuando veredas situadas en las partes más elevadas de las cordilleras, la ausencia de inversión en obras de infraestructura, de políticas apropiadas para la comercialización, el conflicto armado y la ausencia del Estado han limitado su crecimiento económico y social.

En la década de los 50 del siglo anterior, en Huila, como en la mayoría de los departamentos del país, la estructura estatal no había logrado responder a las necesidades básicas de la población, que vivía altos niveles de pobreza, registraba notorias desigualdades y desequilibrios y exigía que el Gobierno mirara hacia la periferia y a esos departamentos metidos en la región Andina y alejados de la capital.

El Estado tampoco había podido establecer el orden ni el monopolio de la seguridad ante la presencia de guerrillas rurales y autodefensas campesinas que empezaban a aparecer en el territorio. Este departamento, junto con Tolima, fue uno de los principales escenarios de la época de “La Violencia” (1946-1953). Allí operaron guerrillas liberales y comunistas, así como bandas delincuenciales de origen conservador que se disputaron el espacio con liberales y comunistas. La confrontación se agudizó cuando algunas de las guerrillas que hacían presencia en Tolima no se acogieron a la amnistía ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla y se movilizaron hacia Huila. También se ubicaron allí núcleos de autodefensas campesinas y de orientación comunista que fueron base para la creación de las FARC en los 60 y cuya presencia ha sido y sigue siendo un factor determinante en la región.

Esta guerrilla, cuyos integrantes habían nacido en diferentes departamentos del sur de Colombia, actuaba en medio de una población que había llegado a Huila y otros departamentos vecinos expulsados por la violencia, hacía parte del proceso de colonización vivido en Meta, Caquetá y Putumayo y se sentía excluida del desarrollo y los espacios democráticos. Otros pobladores, por el contrario, habían huido del departamento hacia áreas como el Ariari-Guayabero.

Los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) habían concentrado el poder y logrado controlar el escenario político, pero la mayoría de la población fuera excluida de cualquier tipo de participación. Así, la formación del Frente Nacional (1956-1974) instituyó



¹ Vicepresidencia de la República. *Diagnóstico del Huila, 2003-2008*, p. 2.

un sistema político cerrado y políticas restrictivas y represivas que tuvieron impacto en zonas alejadas, como Huila, donde no tenían una fuerte presencia los partidos tradicionales.

Surgieron diferentes sectores que luchaban por la defensa de sus derechos sociales y laborales y que reclamaban mejores condiciones de vida, una mayor participación y un espacio en la política nacional.

Además del aspecto político, la crisis económica, principalmente del campo, y el retroceso del proyecto de la reforma agraria fueron otros elementos que terminaron por convertirse en la base de la conflictividad que aún hoy viven el departamento y la región del Piedemonte Amazónico. Este ambiente fue propicio para el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC, que son catalogadas como el actor hegemónico en el Huila.

El problema de la tierra y la presencia de la guerrilla

Después de la época de La Violencia, gran parte de las tierras más planas y fértiles a orillas del río Magdalena fueron concentradas en pocas manos. Los campesinos fueron desalojados y expulsados hacia las cordilleras y las selvas y muchos de ellos llegaron a Caquetá y el piedemonte del Meta.

Entre la celebración de la primera conferencia de las FARC en Marquetalia (Tolima), en 1964, y la cuarta, en El Pato (Caquetá), en 1971, este grupo definió como sus primeros núcleos de expansión al oriente y el occidente de Huila y a El Pato.

En medio de la confrontación que ya vivía la región, durante la década de los 60, en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se realizó una reforma agraria, que fue tímida en el departamento, como observa el analista Alejandro Reyes². El esfuerzo se orientó a la titulación de predios baldíos. Sin embargo, muchos campesinos sin tierra y jornaleros en las empresas arroceras invadieron tierras, que por presión de los acontecimientos de orden público terminaron siendo tituladas.

En una manifestación de campesinos, como señala la obra de Reyes, el presidente Lleras Restrepo señaló “que si los grandes propietarios se oponían a la distribución de la tierra, los campesinos debían ocupar las haciendas para forzar la realización de la reforma agraria”, como en efecto lo hicieron. Ante la resistencia de los terratenientes, en una alianza política entre el Gobierno de Lleras Restrepo y los campesinos, se creó en 1969 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

La movilización y participación ciudadanas de Huila está estrechamente relacionada con esta historia, porque fueron años del auge de las movilizaciones agrarias y del predominio de la organización gremial de los campesinos.

² Reyes, Alejandro. *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, 2009.*

El valle alto del Magdalena, el centro y el sur del Huila han vivido un continuo conflicto de tierras entre grandes haciendas y colonos o campesinos sin tierra, según Reyes. En este territorio, la ANUC tuvo una fuerte presencia en los 60. A finales de los 70, con la desintegración de la ANUC, la guerrilla ganó terreno en grandes regiones como la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y el piedemonte oriental. Sin embargo, continuó existiendo una fuerte presión organizada por la tierra. Ya en los 80, las movilizaciones rurales más intensas tuvieron lugar en regiones de colonización campesina con procesos de concentración de la tenencia; en enclaves agroindustriales o mineros con alta inmigración y conflictos por la distribución de beneficios y, además, en regiones dominadas por el latifundio improductivo, como el sur del Huila.

La violencia de mediados del siglo pasado tuvo como consecuencia la expulsión de centenares de campesinos de estos territorios y redujo las comunidades indígenas a zonas de refugio en tierras altas, erosionadas y poco aptas para la agricultura que practican. De ese contexto se alimentó la guerrilla de las FARC para fortalecerse.

En la década de los 80, tanto las FARC como el ELN comenzaron a tener protagonismo por la expansión de sus organizaciones en el territorio. Desde entonces, las FARC, principalmente, empezaron a usar el departamento como zona de repliegue y de expansión de sus bloques, con el fin de tener control sobre los corredores estratégicos.

La actividad bélica del departamento se incrementó por la presencia de estas guerrillas, pero también por la consolidación de la economía del narcotráfico y la llegada al departamento de grupos paramilitares provenientes de Cauca, Putumayo y Meta.

Los narcotraficantes aparecieron en el territorio, en la década de los 90, comprando tierras, en principio, en los municipios de Gigante, El Hobo, Rivera y Yaguará. Según Reyes, entre 1980 y 1995 el 10,8% de los municipios de este departamento fue objeto de compra de tierras por parte de estos actores, un porcentaje bajo con relación a otras regiones del país.

A su lado, también empezaron a llegar las autodefensas, que tienen sus “raíces en organizaciones que se desarrollaron en Santa María, Colombia y Baraya, vecinos del municipio de Uribe en el departamento de Meta. Sin embargo, tuvieron influencia en zonas muy localizadas, porque su propósito era defensivo y no ofensivo, en principio. Más adelante, entre los años 2002 y 2003, incursionaron otros grupos de autodefensas, con características diferentes y cuyo accionar (sic) se enmarcó dentro de la ruptura de la zona de distensión y la puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática³.

Con la aparición de un nuevo actor en la región, se dio una escalada del conflicto armado entre actores legales e ilegales, quienes comenzaron a luchar por el dominio militar, político, económico y social del territorio, por las zonas de alto interés geoestratégico ante su importancia en



³ Vicepresidencia de la República. *Diagnóstico del Huila, 2003-2008*, p. 4.

recursos naturales y/o destinados a la implementación de grandes proyectos de infraestructura, por los cultivos de uso ilícito y por los corredores estratégicos y del tráfico de drogas y de armas.

Intensificación del conflicto

En la dinámica de la conflictividad, Huila tuvo un impacto especial por el establecimiento de la zona de distensión, conformada por cuatro municipios de Meta (Mesetas, Uribe, Vistahermosa y La Macarena) y uno del Caquetá (San Vicente del Caguán), dos de ellos – Uribe y San Vicente– fronterizos con Huila. Allí se llevaron a cabo los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC (1999-2002).

Este contexto hizo que Huila se convirtiera en un espacio estratégico para los armados en su propósito de controlar y ganar posiciones, lo que repercutió en que la población se convirtiera en blanco de sus incursiones.

De forma paralela al establecimiento de la zona de distensión, y como vía para impedir los diálogos de paz, unos grupos de paramilitares llegaron al Huila para crear el frente sur de los Andaquíes, del Bloque Central Bolívar, con el fin de ejercer control perimetral sobre esta zona. Unos llegaron por Pitalito desde el Putumayo; otros, entraron por el sur desde Caquetá y muchos más ingresaron por el norte procedentes de Meta.

Para 2002, los paramilitares ya habían consolidado su presencia en el suroccidente del país, en muchos casos con la connivencia o colaboración de algunos agentes del Estado. Dicha presencia se vio reflejada en el incremento de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos y amenazas sobre la población civil, entre ella la del Huila, cuyos municipios más afectados fueron Gigante, Pitalito, Garzón, Neiva, Colombia, Baraya, Hobo, La Argentina, La Plata e Isnos, entre otros.

Con la ruptura de los diálogos de paz (febrero de 2002), la fuerza pública puso en marcha una ofensiva hacia los municipios de influencia de la zona de distensión, y en general en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, que buscaba “recuperar” los territorios del dominio histórico de las FARC. Estas operaciones en el sur del país produjeron un aumento de las acciones violentas en los municipios huilenses limítrofes con Meta y Caquetá, provocaron una alteración del orden público, una incidencia en la gobernabilidad del Huila y el aumento de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

De la misma forma, la campaña militar en estos tres departamentos y en el sur del Tolima –con operaciones como la llamada JM, el Plan Patriota o Libertad– llevó a que las FARC realizaran cambios sustanciales en sus estrategias de dominio territorial: se replegaron, se centraron en acciones selectivas y concentraron sus actividades en el suroriente de Tolima y el norte de Huila, en especial en Colombia, Baraya, Tello y Villavieja y muchos de los municipios del Piedemonte Amazónico.

Desde entonces, Huila es un departamento donde “el accionar (sic) de este grupo ilegal (las FARC) es casi hegemónico”, como señala la Vicepresidencia, y que mantiene su control sobre gran parte de las zonas de economía campesina y colonización.

El ELN llegó en 1984 al sur del departamento, en límites con Cauca, y en los años 90 hizo presencia en Neiva, aunque con el paso del tiempo fue desapareciendo como uno de los actores responsables de la conflictividad en el territorio.

Los paramilitares, aunque tuvieron una fuerte presencia entre 2002 y 2003, no tuvieron posteriormente un rol determinante, aunque fue significativo su impacto sobre la población. Para los pobladores de Huila, en el departamento no hubo un terreno abonado para el paramilitarismo, no precisamente por falta de interés de algunos actores regionales para que actuara contra la subversión, desde la ilegalidad, sino por la ausencia de terratenientes o de tenedores de extensos territorios que quisieran buscar, a través de la ilegalidad, la defensa de sus intereses. A diferencia del norte de Colombia, donde las autodefensas se asentaron en las zonas ganaderas o agroindustriales y fueron promovidas por importantes y reconocidos ganaderos y terratenientes, en Huila hay pequeños y medianos propietarios y productores. Otros factores para que estos grupos no se posicionaran fue la falta de apoyo de la clase dirigente y la fuerte incidencia de la guerrilla. Hoy, sin embargo, hay estructuras emergentes que para las organizaciones sociales “son los mismos paramilitares pero con otro nombre”.

A pesar de que las FARC mantuvieron una fuerte incidencia en toda la región, los años posteriores al fin de la zona de distensión se caracterizaron por la iniciativa de las Fuerzas Militares frente al accionar militar de la guerrilla, que se reflejó en intensos operativos militares, bajas importantes de cuadros medios y altos y pérdida del control territorial por parte de la insurgencia, pero igualmente en numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH por parte de todos los actores armados.

Asimismo, el departamento ha sido el escenario de la lucha por el control territorial y la búsqueda por parte de las FARC de incidencia en las autoridades locales –alcaldías, concejos, asambleas- y en el manejo de los recursos públicos que las autoridades reciben por la descentralización administrativa.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la conflictividad en el Huila se ha agudizado a raíz de la intensificación de las acciones armadas, la difícil situación socioeconómica del departamento, la crisis del sector campesino, los conflictos por el modelo de desarrollo que se está promoviendo en la región, la explotación generalizada de los recursos naturales, el aumento de la desconfianza en la institucionalidad y el descontento social. A todo esto se suma la intensificación de la conflictividad en Caquetá, Meta y Putumayo, con su impacto en Huila.

La realidad departamental del Huila ha demostrado que sus pobladores tienen razón cuando afirman que el destino de su departamento está ligado al destino de sus vecinos.



Estos elementos se han convertido en desafíos para la gobernabilidad y en obstáculos para la construcción de paz en la región; aunque, para muchos, Huila es un departamento que puede desempeñar un papel importante en el ámbito nacional en la definición de las bases de futuros acuerdos humanitarios o procesos de negociación.

3. Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

Una de las características de la historia de Huila es su trayectoria de movilización social, debilitada en las últimas décadas primordialmente a causa del conflicto armado, que se ha convertido en la mayor amenaza al tejido social del departamento.

Entre los principales antecedentes de la movilización en el Huila –y que aún tiene incidencia– se encuentran las innumerables luchas agrarias indígenas en 1882, cuando el líder Quintín Lame, amparado en la Ley 89 de 1890, logró que se reconocieran los cabildos indígenas en Ortega y Chaparral (Tolima). Comenzaron así 10 años de disputas en las zonas indígenas de Tolima y Huila, como lo señala un informe de la Vicepresidencia⁴.

A partir de 1945, los despojaron prácticamente de todas sus tierras, tuvieron que migrar y desplazarse de manera masiva, mientras que sus tierras fueron invadidas por campesinos que también habían llegado de otras regiones a causa de la violencia. Con posterioridad, como señala el informe de la Vicepresidencia, “las ideas de Quintín Lame renacieron a la sombra de la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC”.

Este es, precisamente, otro de los antecedentes en la historia del departamento: la lucha por esa tierra, liderada por los campesinos, que se convirtió en una de las razones principales de la organización social, que se remonta a la época de La Violencia cuando, como se dijo, ellos fueron expulsados de sus tierras, que habían quedado en manos de unos pocos.

La lucha por la titulación de predios baldíos y la reforma agraria impulsada en la década de los 60 generaron una acción colectiva de campesinos y jornaleros, con manifestaciones que llevaron a la creación de la ANUC, que cumpliría un rol determinante en la trayectoria de movilización social a partir de los 60.

Con la Asociación, Huila fue el epicentro de una masiva participación ciudadana, de movilizaciones agrarias y de la consolidación de la organización campesina. A pesar de la posterior desintegración de la ANUC, los campesinos continuaron luchando de manera organizada por su derecho a la tierra.

4 Vicepresidencia de la República. Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Pijao.

La región todavía recuerda las movilizaciones que se efectuaron en los 80 y los 90 en defensa de los derechos campesinos y a raíz de la crisis del campo. En los años 90,

“los campesinos del Huila salimos a hacer luchas, un tanto aisladas en un principio. Se comenzó en Pitalito, después en Altamira, luego en La Plata, donde hubo un movimiento que duró un mes en el parque. Posteriormente nos reunimos bajo una organización nacida en el municipio de Gigante, la Comuna Agropecuaria de Gigante, que congregaba algunos sectores y municipios. Pero será un tiempo después, en un encuentro en el municipio de Garzón, cuando se comenzarán a vislumbrar las primeras opciones de consolidar un movimiento a nivel departamental. Ya en el año 94 se vivió una pelea interesante con connotaciones departamentales: el paro del 15, 16 y 17 de noviembre en que se redactó un acta, el Acuerdo del Huila”⁵.

En esa acta, que fue firmada por representantes de entidades del Gobierno, congresistas del departamento y las organizaciones campesinas, se lograron importantes acuerdos, como la suspensión de los procesos judiciales contra los campesinos que tenían deudas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el documento se quedó en el papel.

En los años siguientes, nuevas marchas y movilizaciones se realizaron, pero para entonces, como lo señalan sus líderes, el movimiento era mucho más coherente y organizado en sus reclamos al Gobierno.

“Luego, a nivel de los municipios fuimos conformando las Asociaciones Agropecuarias Municipales, al punto de que prácticamente todos los 37 municipios tienen ya su asociación. Y estos fueron creando los Comités Veredales, que a su vez armaron las famosas Mingas: aquellas que, en la práctica, han impedido que los campesinos sean desalojados de sus fincas por los embargos”⁶.

De manera paralela a esta movilización campesina, que sigue teniendo un rol importante en la región, aunque no como hace 10 años, en las últimas décadas también ha sido notorio el surgimiento de movimientos, organizaciones y liderazgos por la paz, por las salidas políticas y dialogadas a la confrontación armada en defensa de los derechos humanos de las víctimas y por el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia locales.

Este fenómeno se ha dado de forma simultánea al aumento del conflicto armado tanto en el departamento como en los vecinos y a la afectación de estos liderazgos, ya que en la última década la región ha sufrido un incremento de hechos de violencia política y social,



5 *El movimiento campesino en el Huila, testimonio de la Asociación Agropecuaria del Huila. En revista Análisis Político, (28) Mayo-agosto de 1996. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).*

6 *Ibidem.*

entre ellos de homicidios selectivos, sicariato, delincuencia común, limpieza social, violencia contra la mujer, suicidios, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, reclutamiento forzado y extorsiones. Las principales víctimas han sido indígenas, campesinos, otros líderes y organizaciones que están defendiendo sus derechos.

La riqueza de la región en movilizaciones por la paz se evidencia en el hecho de que sea Huila pionero en la creación de las asambleas constituyentes. En 19 de los 37 municipios del departamento funcionaron estas asambleas, consideradas como escenarios para que la comunidad y las autoridades lleguen a acuerdos sobre política pública. Aunque algunas han desaparecido, sobresalen por su consolidación la de Argentina, Tesalia y, en menor grado, Rivera.

Otras iniciativas son los consejos municipales de derechos humanos y paz, el comité humanitario y las agendas municipales de desarrollo y paz, que promueve el Programa de Desarrollo y Paz del Huila y el Piedemonte Amazónico (Huipaz), que busca ser en los municipios una herramienta clave en la articulación entre la institucionalidad y la sociedad civil, en temas de desarrollo y paz, por medio de la concertación.

Huipaz está compuesta por una variedad de integrantes, como organizaciones de la sociedad civil, sectores sociales como los de las mujeres, los indígenas y los campesinos, la Gobernación, la empresa privada y la academia, y pretende el reconocimiento institucional de los retos frente al conflicto armado interno, la paz y el desarrollo y apoyar los procesos sociales organizativos.

De gran incidencia a nivel regional, tanto por su alianza estratégica con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como por ser la más importante organización del departamento por el número de afiliados, es el Consejo Regional Indígena del Huila. Esta organización, ligada también a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), juega en la actualidad un papel clave en la construcción de paz en la región. Además, existe otra organización indígena, la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila (ACIHU).

En el Huila hay diferentes sectores sociales, como los campesinos su fuerte incidencia que tienen en muchos municipios con el trabajo de las Juntas de Acción Comunal. También sobresalen en el departamento las organizaciones de mujeres y jóvenes, entre otros, construidas alrededor de iniciativas de construcción de paz y desarrollo.

Dentro de la variedad de organizaciones, la mayoría son de víctimas del conflicto y enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Hay en el departamento más de 70 organizaciones de carácter local, departamental, nacional e incluso internacional (según OCHA).

En Huila es visible el trabajo que vienen realizando diferentes líderes, víctimas e integrantes de organizaciones sociales en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que se han expresado en manifestaciones, encuentros y audiencias públicas, como la que se realizó sobre el proyecto de ley de víctimas y que no pasó en el Congreso.

Para la mayor parte de las organizaciones sociales, la reparación no debe ser solo para las víctimas de los grupos armados ilegales, como la guerrilla o los paramilitares, sino también para las víctimas de acciones de agentes del Estado.

Este tipo de reparación –que no contempla el Estado– y la reparación individual por vía administrativa –que el Gobierno empezó a pagar en junio de 2009 en diferentes regiones del país– son parte de los temas que han generado debates entre las organizaciones sociales y la institucionalidad departamental y nacional.

Aunque hay sectores que insisten en que la reparación administrativa está dejando de lado la reparación integral, las solicitudes de reparación por vía administrativa radicadas en Huila sumaban 3.405, al 15 de septiembre de 2009, según Acción Social. La falta de información puede ser la causante de que las solicitudes sean muy pocas en comparación con la cantidad de víctimas del Huila, ha dicho la comisionada de la CNRR, Patricia Perdomo. En todo el país las solicitudes, al 12 de mayo de 2010, son 320.981.

Otro tema de permanente confrontación entre la sociedad y la institucionalidad son las violaciones de los derechos humanos de líderes y organizaciones del Huila, más aún ante las denuncias que se han hecho en la región contra algunos miembros de la fuerza pública por sus vínculos con los paramilitares y su participación en los llamados falsos positivos.

En el departamento también sobresale el interés creciente de organizaciones y plataformas sociales alrededor del respeto por el medio ambiente y el derecho a la tierra. Se han articulado y trabajado conjuntamente en su rechazo a la construcción de la represa de El Quimbo y en la búsqueda de un debate amplio sobre el modelo de desarrollo económico y ambiental de la región.

También hay un movimiento de las mujeres en la defensa de sus derechos, su participación activa en el destino del departamento y en la política, con avances importantes. Por un lado, porque ya son consideradas protagonistas e interlocutoras regionales. Y en otro, porque han logrado cargos públicos. Según el plan de desarrollo departamental, para el periodo 2004-2006,

“4 mujeres ocupaban el cargo de alcaldesas, 48 concejales (12% de las curules disponibles) y cerca de la mitad de las personerías era desempeñada por mujeres. La participación en cargos directivos era más alta (42,4%), aunque dispar entre entidades descentralizadas y municipios. En 2005, la participación femenina era mayoritaria en los municipios de Timaná, Guadalupe, San Agustín y El Agrado; en 5 municipios ocupaba menos de una tercera parte de los cargos y en dos no tenía participación”.

Asimismo, hay líderes juveniles que también se han organizado y trabajado por superar sus principales problemáticas, aprovechando para ello la ordenanza 064 de 2004, que



posibilitó la elección de 37 consejos municipales de juventud y el Consejo Departamental de Juventud. Sin embargo, el plan de desarrollo reconoce que esta política...

“no ha logrado su desarrollo integral, por la dificultad en la articulación y falta de compromiso de los diferentes sectores del gobierno, todo esto aunado a las dificultades de orden público, el desempleo, la falta de claridad y oportunidad; además la baja oferta institucional ha generado en nuestros jóvenes apatía, baja participación y poca credibilidad frente al desarrollo de los mismos”

Ha sido importante la participación ciudadana del Huila en espacios de incidencia, desde lo local hasta lo regional, aunque uno de los retos es lograr una mayor interlocución como la institucionalidad y, especialmente, tener mayor incidencia en la política pública, que es muy poca. Así lo reconocen ellas mismas y lo señala el Plan de Desarrollo departamental.

Este documento indica que la “participación ciudadana se logra en la medida que existan organizaciones sociales sólidas, comprometidas, sostenibles, solidarias y con una gran capacidad de autogestión, producto de procesos de consolidación en el tiempo”, pero que Huila aún no cuenta con este tipo de organizaciones y que el enfoque hacia el fortalecimiento de la sociedad civil “no puede seguir siendo desde la perspectiva de las acciones de coyuntura, el asistencialismo y el mínimo cumplimiento de los parámetros legales”.

Mientras el plan de desarrollo destaca con precisión las principales organizaciones sociales tanto en el sector gobierno como de desarrollo comunitario, no hay en él una referencia directa a organizaciones de víctimas o defensoras de derechos humanos, aunque sí indica el fomento y apoyo que se debe brindar a las organizaciones de mujeres, a las comunitarias que trabajan en salud y a las de vivienda y empleo, entre otras.

Entre las numerosas organizaciones vinculadas al sector gobierno y al desarrollo comunitario, según el plan de desarrollo departamental, se encuentran activas:

- ▶ 2.510 juntas de acción comunal, y juntas de vivienda comunitaria en los 37 municipios del Huila.
- ▶ 30 asociaciones de juntas de acción comunal en 36 municipios y 10 que corresponden a cada comuna de Neiva.
- ▶ 100 clubes y ligas deportivas en los 37 municipios, incluido Neiva.
- ▶ Otros espacios como cuerpos de bomberos voluntarios, organizaciones de educación no formal y entidades sin ánimo de lucro, tales como comités de vivienda, asociaciones de vivienda, fundaciones, corporaciones y clubes.

Por ley, hay numerosos espacios de participación ciudadana que deberían ser fortalecidos para que la población participe y pueda incidir en temas como la educación o la salud. Así, por ejemplo, según diferentes leyes y decretos reglamentarios, se exige la participación ciudadana en los consejos directivos, académicos, de padres de familia y estudiantiles; los

consejos municipales de juventud; los consejos territoriales de seguridad social en salud, las veedurías en salud, las asociaciones de usuarios, las unidades de rehidratación oral comunitaria y de saneamiento básico, las redes de apoyo y los vigías de la salud.

Tradicionalmente, un elemento clave en la participación son las veedurías ciudadanas, escenarios en los cuales se debería fortalecer una presencia activa de las organizaciones sociales, más teniendo en cuenta que en el departamento funciona la Red de Control Social a la Gestión Pública; que hay veedurías del régimen subsidiado de salud, inscritas en las personerías municipales, y que la Contraloría General constituyó para el departamento tres veedurías: una en Garzón para el seguimiento del tema de desplazamiento; la segunda en Neiva y Pitalito para el seguimiento de la temática de salud de las fuerzas militares y, en tercer lugar, el denominado Comité de seguimiento a las regalías del petróleo en el departamento del Huila.

Naciones Unidas hace presencia en la zona con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en los 37 municipios del Huila y por medio del PNUD y su programa ART REDES, que cubre todo el departamento y algunos municipios del Piedemonte Amazónico. Asimismo, Acnur acaba de abrir oficina en Neiva, que además de Huila cubrirá Tolima y Caquetá. También está la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en los Derechos Humanos (OACNUDH), que aunque no tiene sede en el territorio, un delegado que cubre los mismos departamentos de Acnur.

4. Situación actual y dinámicas

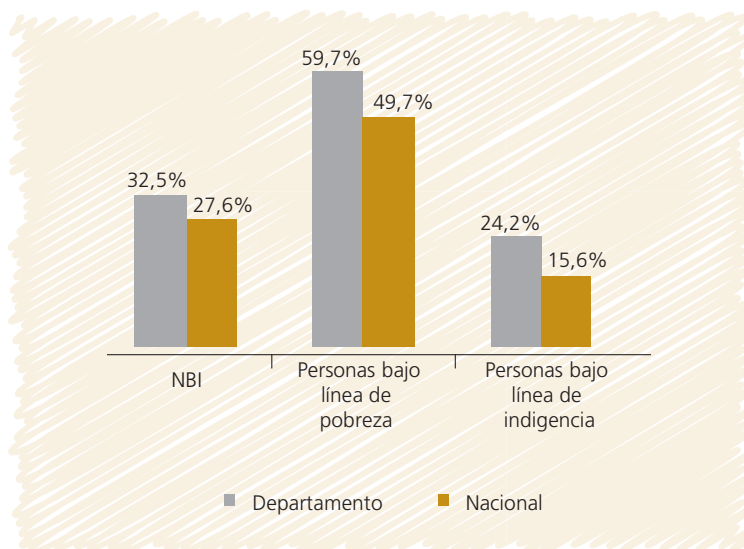
Situación social

Varios indicadores sociales evidencian la situación social que enfrenta Huila. Si bien en algunos hay progresos, en otros el departamento aún enfrenta condiciones que son un reto para su desarrollo.

En Huila hay unos altos niveles de pobreza y de inequidad, según las informaciones más recientes, que datan de 2004 y 2005. El porcentaje de personas bajo línea de pobreza se ubicaba en el 59,7%, según el censo - 2005. Estas cifras no solo son superiores al promedio nacional sino que están lejos de alcanzar la meta del milenio, cuyo objetivo es reducir al 28,5% la población por debajo de la línea de pobreza (gráfico 1).



Gráfico 1. Índices de pobreza, nacional versus departamento de Huila (año 2005)



Recuadro 1. SITUACIÓN SOCIAL

Línea de pobreza (LP)	En 2003, la LP fue de 70,6%, en 2004 de 66,1% y en 2005 de 59,7% (DANE).
Educación (analfabetismo)	Existe una tendencia decreciente en analfabetismo en los últimos diez años. En 2005 fue de 16,6% (DANE).
Empleo	El desempleo está aún en recuperación de la crisis de 1999. Aun así, continúa elevado (9,70%) (DANE, Censo 2005). El desempleo en Neiva fue del 15,4% en el primer trimestre de 2010 (DANE).
Género	Entre 2008 y 2009 aumentaron todos los indicadores de violencia intrafamiliar; incluso la tasa fue superior a la nacional (Medicina Legal).
Mortalidad infantil	En 2005, la mortalidad infantil era de 27 por 1.000. La desnutrición crónica de menores de 5 años ascendió a 13% (Profamilia).
Necesidades básicas insatisfechas	En 2005 fue de 32,5%, mientras que en sus zonas rurales la cifra fue de 48,7% (DANE, Censo 2005).
Cobertura alcantarillado y acueducto	La cobertura de alcantarillado en 2005 fue de 65,4% y la de acueducto fue de 88% (Secretaría de Salud del Huila).

Según un informe sobre el departamento para determinar su grado de alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio⁷, se observa una tendencia como la del año 2004, cuando la mayoría de los municipios estaban...

“por debajo de 67 puntos, no alcanzando el mínimo constituyente que determina una buena calidad de vida de sus hogares. Solamente Neiva aparece en el quintil 5. En

7 PNUD, Colombia (2008). *El departamento del Huila frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio*.

general, el nivel de pobreza observado en el Huila en el 2004 fue del 66,1% y en la Nación del 50,7%, muy lejos de la meta a ser alcanzada por las Naciones Unidas. La indigencia el Huila aparece con el 30,4% en contraste con la Nación que presenta solo un 17,0%”.

En 2005, Huila tuvo un índice NBI (necesidades básicas insatisfechas) de 32,5%, mientras que en sus zonas rurales la cifra fue de 48,7%:

Para el año 2004, Acevedo fue el municipio con el porcentaje más bajo (26,2%), en contraste con Nátaga (66,8%) que tuvo el índice más alto. En promedio en el Huila el nivel de NBI es del 48,5% con una variabilidad alta de 8,8 puntos porcentuales entre cada municipio⁸.

Según un informe de Huipaz (2008) realizado para la elaboración del plan de desarrollo departamental 2008-2011, en la capital del departamento se presentan grandes cordones de miseria alrededor de la ciudad, donde conviven la población oficial registrada en el municipio y un gran número de población no registrada.

Como lo han señalado analistas y líderes del territorio, llama la atención esta situación social, máximo si se tiene en cuenta que Huila es, como otros departamentos, receptor de importantes recursos productos de las regalías por el petróleo.

A esta situación se suma que Huila es uno de los departamentos con más altas tasas de desempleo y subempleo, donde la informalidad y el sector de los servicios son los dos renglones de mayor activo de mano de obra. En 2007, la tasa de desempleo de este departamento fue de 9,61%, aunque estuvo por debajo del promedio nacional –que se ubicó en el 11,13%–, el nivel continuó siendo alto (DANE).

Incluso, según indicadores de mercado laboral por ciudad, en el trimestre enero-marzo de 2010, el desempleo en Neiva fue del 15,4%, superando la tasa nacional, que para dicho trimestre fue del 13%.

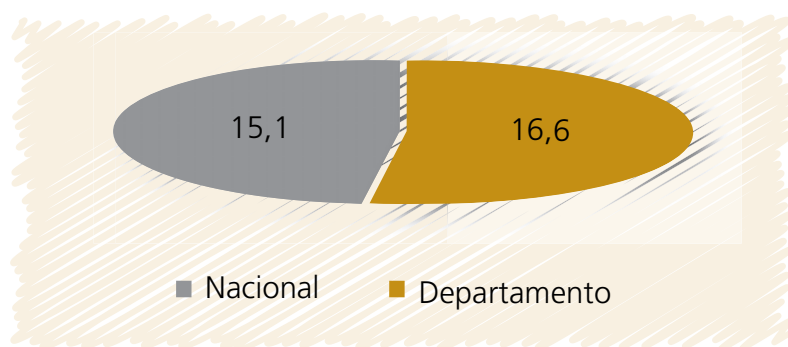
Educación

El 16,6% (Censo - 2005) de la población de Huila es analfabeta, cifra que, al igual que en el tema de pobreza, es superior al promedio nacional (gráfico 2).

El bajo nivel educativo representa un obstáculo para mejorar el empleo y la calidad del mismo y, a su vez, para superar los niveles de pobreza del departamento. Pero de la misma forma, la pobreza es un factor que afecta la educación de habitantes en estado de mayor vulnerabilidad. Más aun cuando Neiva se encuentra entre las diez primeras ciudades con los costos de vida más altos del país, según el informe de Huipaz.



Gráfico 2. Tasa de analfabetismo, nacional versus departamento de Huila (año 2005)



El analfabetismo urbano está en el 19,9% y en la nación en el 25,3%. El área rural presenta una tasa del 40,2%, mientras que en la Nación es del 48,4%.

“Un comportamiento similar se presenta por género: mientras que para los hombres es de 31,9%, para las mujeres es de 26,7%. Para la Nación los hombres aparecen con el 48,4% y las mujeres con el 25,3%. Se observa una gran brecha de analfabetismo. Agréguese el comportamiento observado para el analfabetismo en la población mayor de 15 años, en donde Neiva presenta el menor porcentaje (5,3%) y Algeciras el de mayor nivel (23,6%). En promedio este analfabetismo se encuentra alrededor del 13,1%, con una heterogeneidad sentida entre los diferentes municipios (3,6%)”⁹.

En 2004, la deserción escolar en el Huila era del 5,7% y en el país del 7%.

En cuanto a la cobertura de la educación básica, en 2005 la tasa estaba por debajo del comportamiento nacional: 67,8%, en contraste con la nación que era del 71,1%, según el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El plan de desarrollo departamental plantea precisamente que, frente a la cobertura, el departamento presenta una alta proporción de niños, niñas y jóvenes sin la debida atención del sistema educativo de Huila en educación preescolar, básica secundaria y media. En básica secundaria la cobertura es del 79,19% y en educación media del 49,63%.

Según los últimos informes del DANE retomados por el informe sobre los ODM, el promedio de años de escolaridad de Huila es entre 3 y 6 años, comportamiento similar al que se registra en sus municipios. “Un indicador muy bajo por lo que es importante plantear estrategias que posibiliten fortalecer la acción educativa en la región, con miras a alcanzar los objetivos del milenio”¹⁰.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ *Ibidem.*

Sobre la calidad, hay un bajo nivel de aprendizaje y de desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales de los escolares de educación preescolar, básica y media, dice el plan de desarrollo. En cuanto a la eficiencia, señala que hay un bajo nivel de integración de recursos físicos, humanos y financieros frente a los procesos administrativos y pedagógicos en las instituciones educativas, que no permite optimizar resultados en términos de cobertura y calidad educativa en el departamento del Huila.

Entre las situaciones más preocupantes están la existencia de un número elevado pero no calculado de niños y niñas en edad escolar que deben trabajar para ayudar al sostenimiento de sus familias; la mala nutrición, que provoca un bajo rendimiento académico y la deserción escolar, y la existencia de instituciones educativas que no gozan de infraestructura y dotación suficientes para responder a las necesidades de la población escolar.

En ese sentido, el informe sobre los ODM en el departamento advierte que la población que no asiste a las instituciones educativas está entre el 15 y el 24%, y señala que ello se debe a la falta de cupos y a la necesidad laboral y de ingresos:

“Se percibe en general un círculo vicioso que se genera en las familias, donde es más rentable trabajar para conseguir ingresos o recursos económicos para sostener los gastos familiares, que invertir tiempo y recursos en la educación de los integrantes de las familias”¹¹.

Salud

Los retos del departamento en esta materia se asocian a la disminución de la mortalidad y la desnutrición infantil, al aumento de la cobertura y al mejoramiento del saneamiento básico.

Según el plan de desarrollo, la mortalidad infantil del departamento tiene relación con sus condiciones de pobreza y sus niveles de seguridad alimentaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de Profamilia del año 2005 (la más actualizada sobre el tema), la tasa de mortalidad infantil es de 27 por 1.000 en Huila, mientras que la nacional es de 19 por 1.000. La encuesta también refleja el problema alimentario del departamento: la desnutrición crónica de menores de 5 años en 2005 ascendió a 13%, mientras que la del país fue del 11%.

El informe de Huipaz señala que Huila presenta una difícil situación en 17 municipios debido al difícil acceso que tienen a los alimentos; la producción primaria no diversificada y la baja comercialización de los productos hacia zonas urbanas. Plantea también que esto se debe a las inadecuadas técnicas productivas y el deterioro de los suelos.



11 *Ibidem.*

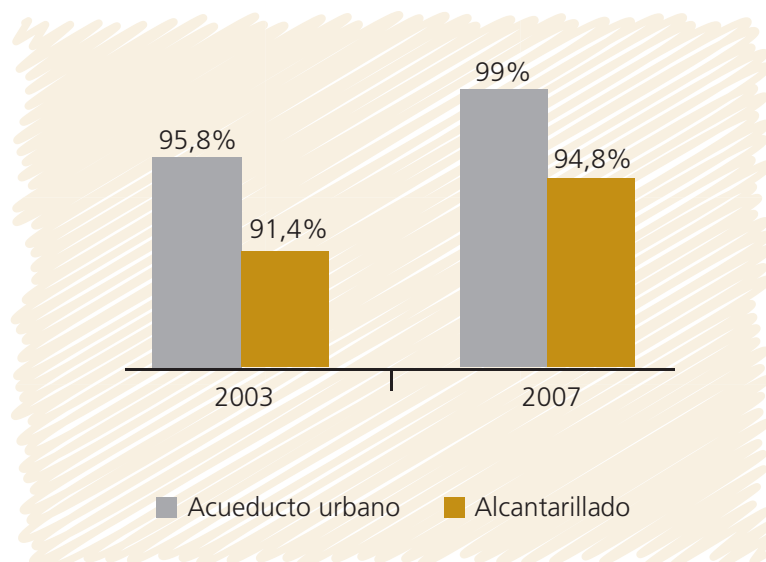
En 2005, la cobertura global de acueducto para el departamento era de 78,7% (en la zona urbana el 98,9% y en la rural el 72,2%). En Colombia, por el contrario, la cobertura global es del 83,4% (94,3% para la zona urbana y 47,1% para la rural). En cuanto a alcantarillado, en 2005 la cobertura global del servicio en el Huila era del 65,4% (en la zona urbana del 96,1% y en la rural del 34,6%). En el país, la cobertura global era del 73,1% (en la zona urbana 89,7% y en la rural 17,8%). Huila presenta unas mejores tendencias de servicios respecto a la nación, según el informe de los ODM (gráfico 3).

Frente a la salud, del total de la población pobre y vulnerable de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, la cobertura de afiliación al régimen subsidiado es del 85,33%. Sin embargo, para garantizar la cofinanciación y continuidad del régimen subsidiado, el plan de desarrollo advierte un déficit económico por parte de los municipios para asumir su responsabilidad.

Otros indicadores importantes evidencian el comportamiento social del Huila, según el informe de los ODM:

- ◆ Elías aparece –en 2005– como el municipio donde no se presentaron casos de muertes infantiles, e Iquira como aquel de mayor mortalidad (54,8 por 1.000 nacidos vivos), con una alta variabilidad de muertes en menores de un año entre los diferentes municipios (11 por 1.000 nacidos vivo), según la Secretaría de Salud departamental. Para la nación, esta tasa se encuentra alrededor del 16,28 por 1.000 nacidos vivos.
- ◆ Para el periodo 2003-2006, mientras que para el país se observa una disminución de la mortalidad en menores de un año del 6,4%, para el Huila hay crecimiento del 10%, según la Secretaría de Salud de Huila. Para la mortalidad en menores de 5 años, el departamento registra una tasa promedio de 20 por 1.000 nacidos vivos,

Gráfico 3. Cobertura en saneamiento básico en Huila



con una alta variabilidad relativa entre los diferentes municipios (11,7 por 1.000 nacidos vivos): Nátaga es el que menor número de casos presenta (7,8 por 1.000 nv), en contraste con Iquira que aparece con el mayor número (61 por 1.000 nv). En general, los comportamientos en menores de 1 y 5 años son crecientes e inversamente proporcionales a los nacionales.

- ◆ Con respecto a la atención del parto en instituciones de salud, el 78,9% son atendidos efectivamente en alguna IPS. El municipio de Colombia es el de menor cuidado institucional (52,4%), mientras que en San José de Isnos el 100% de los partos tienen atención institucional, según la Secretaría de Salud departamental.
- ◆ En Huila la población de adolescentes (15-19 años) que alguna vez han estado embarazadas era del 17,2 %, y en la nación del 20,5%, valores que se acercan a la meta ODM, según la Secretaría de Salud departamental.

Equidad de género

El departamento tiene el reto de superar las problemáticas relacionadas con la violencia contra las mujeres y de acceso de ellas a fuentes de empleo.

En la última década, la violencia intrafamiliar en Colombia ha ido en ascenso, especialmente a partir de 2004, situación que se presenta en su mayoría por la violencia de pareja, que en 2009 contó con una representación porcentual del 65%, seguido de la violencia entre otros familiares (18%), violencia infantil (15%) y, por último, violencia contra el adulto mayor (2%), según el informe Forensis 2009 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En todas las expresiones de la violencia intrafamiliar, en el país las mujeres fueron las víctimas más frecuentes con un incremento considerable de la violencia de pareja. Según las estadísticas, la violencia intrafamiliar ocupó el segundo lugar entre todas las lesiones no fatales, con el 31% en 2009, lo cual revela a la institución familiar como uno de los principales escenarios en los que la violencia cobra importancia. “Datos preocupantes, teniendo en cuenta que el espacio familiar es el marco referencial de cualquier persona en el momento de resolver un conflicto”, dice el informe de Medicina Legal.

En el caso del Huila la situación también es preocupante ya que se observa un aumento de todos los indicadores entre 2008 y 2009: violencia de pareja, maltrato infantil y violencia entre otros familiares (cuadro 1). Incluso, en esos dos años la tasa fue superior a la nacional.



Cuadro 1. CASOS Y TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR						
		Violencia de pareja	Maltrato infantil	Violencia entre otros familiares	Total	Tasa
Huila	2008	1.481	265	443	2.189	208
	2009	1.584	361	476	2.421	227
Colombia	2008	58.533	13.523	17.747	89.803	202
	2009	61.139	14.094	18.629	93.859	209

Fuente: Forensis 2009, Instituto Colombiano de Medicina Legal.

En materia salarial y de empleo, hay que hacer mayores esfuerzos. Según el informe de ODM, un caso lo demuestra: las mujeres del Huila ocupaban el 18% de cargos públicos en la Gobernación en el año 2006, cifra por debajo del marco legal colombiano, ya que la Ley 581 de 2000 estableció como mínimo el 30% de cargos ocupados por las mujeres en cada una de las entidades públicas.

Situación económica

La agricultura es la principal y tradicional actividad del departamento en la economía del Huila. En 2005, fue la actividad con mayor participación sobre el PIB departamental (18,44%), seguida por el sector minero (con una participación del 11,48% para el mismo año) y la construcción (9,15%). La ganadería, la pesca y la silvicultura ocuparon en conjunto el cuarto renglón de la economía, con una participación del 7,91%, según el plan de desarrollo 2008-2011. Otros sectores, como construcción, comercio, hotelería y restaurantes, transporte y comunicaciones, entre otros, participaron con el 37,25% del PIB total departamental.

“Dentro del PIB departamental en los últimos 15 años la actividad más representativa ha sido la agricultura en donde se destacan cultivos como arroz, sorgo, plátano, café, yuca, caña, maíz y frutas; aunque esta ha venido perdiendo importancia dentro de la producción total departamental (a principios de los años 90 representaba el 21,13% del PIB departamental, mientras que para el año de 2000 esta solo representaba el 18,30%) sigue siendo la principal fuente de ingresos para el departamento. Caso contrario ha ocurrido con el sector minero, en donde sobresale la extracción de hidrocarburos (97% sobre el total de la explotación), que para el año de 1990 arrojó una participación de 12,74% y para el año de 2000 de 14,54%, lo que refleja que este sector ha venido cobrando importancia dentro de la economía huilense; este aumento se ha debido

básicamente a la combinación entre el incremento en la producción y la dinámica en los precios internacionales del petróleo¹².

El sector agropecuario (agrícola, pecuaria, silvicultura, piscicultura y pesca) es la principal actividad productiva del departamento. Tiene una participación en el PIB Departamental del 14,61% (2003).

La actividad agrícola responde por el 81,5% del total del sector agropecuario y corresponde a cultivos básicos como el café, frutales, arroz riego, maíz, frijol, algodón, tabaco rubio, tomate de mesa, habichuela y arveja.

El café es la actividad económica que más aporta en el valor de la producción agrícola, con el 57,52%; los cultivos transitorios básicos participan con el 21,8% y los frutales con el 7,1%.

Por su parte, la producción pecuaria está representada en la ganadería bovina (84,26% del total) y el resto en avicultura, piscicultura, porcicultura y apicultura, en su orden de importancia. El departamento es el primer productor de tilapia en el país y participa con el 53% de la oferta nacional.

La minería se ha convertido es una apuesta productiva de la región y también en generadora de problemas sociales. El plan de desarrollo advierte que:

“el ciclo minero, que comprende la gestación, exploración, preparación, desarrollo, explotación, beneficio, transformación y comercialización minera, en el departamento del Huila, se caracteriza por el predominio de técnicas artesanales adelantadas por mineros y transformadores, que incumplen parcial o totalmente los aspectos legales, ambientales, técnicos y sociales que norman la actividad extractiva e industrial, así como sus obligaciones fiscales, generando dificultades productivas y grandes conflictos de tipo social, riesgos técnicos e impactos ambientales, que colocan al sector minero en desventaja competitiva frente a su dinámica nacional y global”.

En el departamento existen 643 minas. En 2008 se tramitaban ante Ingeominas 217 solicitudes de titulación de áreas para explotación minera, entre propuestas de contratos de concesión y autorizaciones temporales.

El plan de desarrollo, así mismo, plantea que para lograr bajar la línea de pobreza se requieren estrategias económicas y sociales enfocadas tanto en las grandes empresas impulsadoras de la capacidad productiva del departamento, como en los pequeños cultivadores minifundistas y en los integrantes de esos hogares. “Lograr reducir la pobreza requiere no solo trabajar en los demás ODM, sino ir de la mano con una visión económica productiva que favorezca al que tiene menos herramientas y capacidades”, señala el documento.



12 Plan de Desarrollo del Huila 2008-2011, Huila, naturaleza productiva.

Sin embargo, diferentes sectores sociales están preocupados por el modelo económico que se está impulsando en el departamento a través de megaproyectos, por el impacto que los mismos puedan tener en la economía regional y, de manera especial, en el sector agropecuario y los pequeños productores, más teniendo en cuenta que el uso de la tierra sigue siendo un tema de discusión, como lo advierte el propio plan de desarrollo:

“La estructura agraria departamental muestra que el acceso a la tierra y los patrones de uso del suelo están condicionados al antagonismo entre su vocación y uso, a la distribución de la tenencia y a la movilidad de la tierra como factor productivo. En esta estructura coexisten simultáneamente un sector de economía avanzada y otro de economía de subsistencia tradicional”.

Uno de los mayores desafíos del Huila es que encuentre ingresos alternativos, ya que las inversiones en el departamento son financiadas en su mayoría por las regalías del petróleo. Huila extrae petróleo crudo desde el año 1979. “Para 2008 el sector hidrocarburos y minería representó el 19,7% del valor total de la actividad económica del departamento, desplazando al sector agrícola al segundo lugar, con una participación del 18,1% en el PIB departamental”¹³. En la actualidad, está entre los mayores productores del país y uno de los departamentos que más recibe regalías por ese concepto (cuadro 2). Los municipios que más reciben son Neiva, Aipe, Palermo y Yaguará.

Cuadro 2. REGALÍAS RECIBIDAS POR HUILA (MILLONES DE PESOS)										
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	A junio 2009
45.981,82	126.786,76	101.046,91	103.869,91	159.125,43	156.753,33	205.175,86	297.430,30	274.437,30	404.235,20	109.845,50

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía.

Entre 1999 y junio de 2009 el departamento de Huila y sus municipios recibieron cerca de 1.9 billones de pesos por regalías y sin embargo los indicadores sociales no han mejorado, aunque la Ley 141 de 1994 y sus respectivos decretos han señalado las prioridades que deben tener los departamentos y municipios en el uso de las regalías: mortalidad infantil, cobertura mínima en salud, educación básica y agua potable y alcantarillado.

“En el departamento del Huila los esfuerzos realizados para atender las coberturas mínimas exigidas por el decreto reglamentario de participación de regalías, no han sido suficientes, particularmente para la zona rural, por lo que se considera que es necesario superar la brechas presentadas si se tiene en cuenta que en el Huila existen municipios

13 Contraloría Departamental del Huila (2008). *El impacto de las regalías petrolíferas en el departamento del Huila*.

que reciben regalías, como: Neiva, Baraya, Villavieja, Aipe, Palermo y Yaguará, y que para el último cuatrienio el Huila recibió aproximadamente 562 mil millones por este concepto¹⁴.

La misma preocupación la expresó la Contraloría del Huila luego de realizar un estudio sobre el uso de las regalías:

“La destinación de las regalías no ha sido eficiente; la inversión efectuada con esos recursos no se ha reflejado en beneficio económico y social para el departamento, como habría de esperarse, pues, aunque se muestran inversiones, los resultados no son positivos y además no son percibidos por la comunidad en general¹⁵.”

Otro de los problemas del departamento desde el punto de vista económico, como lo plantea el plan de desarrollo, es que por tratarse de recursos no renovables, no se garantiza la sostenibilidad económica del Huila a largo plazo. El estudio del Departamento Nacional de Planeación, titulado “Huila: ¿futuro sin regalías?”, advierte que si en seis años no se han descubierto nuevos yacimientos de petróleo, el departamento dejaría de contar con estos ingresos.

Por otra parte, las deficiencias en la infraestructura departamental y las limitadas políticas para la comercialización de sus productos son factores que también limitan su crecimiento económico. A esto se suma la falta de seguridad de las áreas urbana y rural por la presencia de grupos armados al margen de la ley, que desestimulan la inversión de capitales propios y externos. Asimismo, la vocación en el sector primario de la población del departamento y la carencia de desarrollo tecnológico para la producción son factores que también impiden la evolución del sector productivo para generar riqueza y ocupación a sus habitantes.

Situación ambiental

La región surcolombiana es considerada estratégica, entre otras razones mencionadas, por su enorme riqueza natural, ya que allí confluyen los ecosistemas Pacífico, Andino y Amazónico y es zona de encuentro de ecosistemas de gran importancia, lo que ha hecho que sea un departamento particular en los temas de biodiversidad y del agua.

Este departamento hace parte de la cuenca alta del río Magdalena, donde nacen el Macizo Colombiano y los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Histórica y geográficamente, se constituye en el cruce de los cuatro corredores estratégicos mencionados.

¹⁴ PNUD, Colombia. *Op cit.*

¹⁵ Contraloría Departamental del Huila. *Op. cit.*



El departamento tiene una extensión de 662.574 hectáreas de ecosistemas estratégicos, en los que se destacan tres corredores de conservación: corredor del valle alto del río Magdalena, asociado a las áreas de bosque seco tropical; la región ecológica de La Tatacoa, el corredor del Macizo Colombiano y el corredor Trasandino Amazónico. Sobre ellos se ubican áreas naturales importantes como los cinco parques nacionales, los parques naturales regionales Cerro Páramo Miraflores y Serranía de Minas y las áreas naturales Cerro Banderas Ojo Blanco y Siberia.

Actualmente, sin embargo, los ecosistemas del Huila presentan un proceso de deterioro ante la tala indiscriminada de bosques, el uso erróneo del suelo y las inadecuadas prácticas agropecuarias.

“El 46% del territorio departamental presenta conflicto alto por uso del suelo, asociado principalmente a la intervención y/o transformación de ecosistemas naturales. Cada año se utilizan 81.782 m³ de madera que corresponde a 58,8 millones de postes y/o varas; además se demandan 1.782.000 cajas para embalaje de tomate y otros productos. Se podría estimar que corresponde a un área intervenida de bosque natural aproximada de 1.363 has., si consideramos que en promedio se estima 60 m³/ha”.¹⁶.

En tal sentido, la población y sus organizaciones han expresado preocupación por dos situaciones en particular. Una, los efectos ambientales y sociales de grandes proyectos de infraestructura. Y dos, el impacto de los cultivos de uso ilícito.

En la actualidad, organizaciones del Huila, congresistas, líderes de opinión y académicos han expresado su preocupación y rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en la desembocadura del río Páez sobre el Río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira.

Según el “Estudio de impacto ambiental”, de octubre de 2008, elaborado por la empresa internacional Engesa –que construirá la obra–, “el embalse tendrá una longitud de 55 km al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.250 ha., el volumen total de embalse de 3.205 hm³ y el volumen útil de almacenamiento útil de 1.824 hm³”.

Asimismo, según el mismo documento, las veredas y centros poblados que hacen parte del área de incidencia directa serán “los que se localizan en la zona de embalse, obras y vías sustitutivas: La Cañada, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga y Pedernal en jurisdicción del municipio El Agrado; del municipio de Garzón las veredas: Alto San Isidro, Monserrate, Balseadero, Jagualito, Barzal, Los Medios, y el centro poblado La Jagua; del mu-

16 *Ibidem.*

nicipio Gigante las veredas Matambo, Ríoloro, Veracruz, Libertador, La Honda, Espinal. Del municipio Altamira, la vereda Llano de la Virgen, y la vereda Alto de la Hocha, del municipio Paicol hace parte Domingo Arias, el municipio Tesalia, haría parte de esta área, debido a que allí estarían ubicadas algunas zonas de préstamo”.

La obra ha sido tema de debate en el Congreso y en foros locales y nacionales. Precisamente, durante un foro sobre la problemática agraria en el Huila (9 de septiembre de 2009), que se cumplió en la Asamblea Departamental, campesinos del departamento reiteraron su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica. Rigoberto González, representante de la Asociación de Campesinos del Huila, señaló que la construcción de la hidroeléctrica provocará un retroceso en la producción agropecuaria porque las hectáreas que serán inundadas son hoy muy productivas y fuente de consumo para la región:

“Rechazamos la construcción de El Quimbo y por eso queremos decirles a los campesinos que debemos defender la soberanía de la tierra. Este proyecto traerá mayor desplazamiento y mayor inestabilidad productiva para la región, pues muchas hectáreas que son productivas serán inundadas para darle paso a este proyecto que solo beneficiará a una firma extranjera (Diario del Huila, 10 de septiembre de 2009)”.

La discusión alrededor de la construcción de esta obra ha promovido la articulación y el trabajo coordinado de diferentes organizaciones sociales que se han unido para promover un movimiento de rechazo a dicha obra.

Otro factor que crea preocupación de la población es el impacto ambiental de los cultivos de uso ilícito y de las políticas nacionales de erradicación de dichos cultivos. Aunque Huila no registra un número significativo de cultivos de hoja de coca, sus departamentos vecinos sí son algunos de los mayores productores, lo que ha terminado por afectar al departamento ante el desplazamiento de poblaciones provenientes de Caquetá, Putumayo y Meta (importantes productores de hoja de coca) hacia Neiva, Pitalito o San Agustín.

En el Huila hay cultivos de amapola, aunque en los últimos años han disminuido de manera significativa, según el último censo de cultivos de coca 2008, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentado en julio de 2009 (cuadro 3). Según este censo, se han erradicado de manera manual 29 hectáreas de cultivos de coca y 22 hectáreas de cultivos de amapola.

Cuadro 3. CULTIVOS DE AMAPOLA

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Huila	636	1.135	320	114	45	45

Fuente: Censo de cultivos de coca 2008, UNODC.



Situación política y de gobernabilidad

El conflicto armado, especialmente, ha tenido un impacto directo en la gobernabilidad del departamento y en su población. Su efecto sobre la gobernabilidad se expresa, entre otros aspectos, en las amenazas constantes contra alcaldes, concejales, gobernadores y otros funcionarios públicos, que han incidido en el funcionamiento de la administración local y generado rupturas entre las comunidades y sus instituciones.

Hace tres años, los mandatarios locales no podían despachar en sus regiones debido a los asesinatos y amenazas constantes a las máximas autoridades locales y funcionarios públicos (ver cuadro 6 más adelante).

La población aún recuerda hechos que han marcado a la región: la renuncia por las amenazas –en 2002– de concejales de 12 municipios (Algeciras, Rivera, Acevedo, San Agustín, Baraya, Tello, Oporapa, Altamira, Campoalegre, Colombia, Gigante y Guadalupe) y el asesinato –en 2006– del alcalde de Rivera, cuatro concejales del municipio de Campoalegre y 9 de los 11 concejales de Rivera, quienes estaban bajo la protección del Ministerio del Interior.

Si bien la situación ha tenido una mejoría, la región continúa siendo –en este aspecto– una de las más problemáticas del país. En el 2008 fue asesinado un concejal de Algeciras y uno de Suaza, mientras que varios de Pitalito fueron víctimas de amenazas. En 2009, entre tanto, se produjo un asalto a la sede de la alcaldía de Garzón, donde también operan el Palacio de Justicia y el Concejo, cometido por 10 guerrilleros de las FARC quienes buscaban raptar a los 15 concejales. Cuatro personas murieron y un concejal fue secuestrado en un acto realizado el 29 de mayo y considerado un desafío de la guerrilla a la política de seguridad democrática. A raíz de este plagio, 183 concejales del departamento renunciaron temporalmente para reclamar una mayor y mejor protección por parte del Gobierno Nacional.

Funcionarios públicos sigue aduciendo falta de garantías por parte del Estado para cumplir con sus responsabilidades ante el aumento de las amenazas y de las presiones por los actores armados, que en algunos casos ha obligado a que tengan que sesionar en otros lugares.

En la actualidad, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha elaborado informe de riesgo para autoridades y funcionarios públicos de seis municipios: El Hobo, Neiva, Algeciras, Colombia, Baraya y Tello.

El Huila fue uno de los departamentos con el mayor número de secuestrados y “canjeables políticos” en poder de la guerrilla (entre ellos congresistas), lo que llevó a que este departamento siempre fuera tema de referencia a la hora de hablar del acuerdo humanitario.

La crítica situación de orden público ha sido prioridad en la gobernabilidad departamental. Para la Gobernación, gracias a la política de seguridad democrática el departamento ha logrado un positivo panorama de gobernabilidad en todo su territorio que se traduce, entre otras cosas en:

- a. la reducción de los principales índices del conflicto armado;
- b. la autoridad ejercida por las autoridades administrativas de los 37 municipios en sus propias cabeceras y despachos;
- c. la disminución del asalto en las carreteras y otras acciones delictivas con la presencia permanente de la Policía y el Ejército en las principales vías de comunicación del departamento
- d. la reducción de tomas, asesinatos y otras acciones de la insurgencia por la presencia de la fuerza pública y la desmovilización de miembros de las FARC, lo que ha debilitado su capacidad operativa.

Sin embargo, el impacto de la escalada de la confrontación armada entre las Fuerzas Militares y la guerrilla, la presencia de delincuencia y las estructuras emergentes y los numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos denunciados siguen siendo tema prioritario para la gobernabilidad ante las constantes violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Y lo son también porque explican en qué contexto y de qué manera están afectando los esfuerzos de construcción de paz en las regiones.

Para las autoridades locales y departamentales debe ser un reto enfrentar los problemas de seguridad en el territorio y, en esa medida, el aumento de los homicidios como consecuencia directa del conflicto armado (ver gráfico 4, más adelante).

Si bien las políticas públicas de seguridad ciudadana deben dar respuesta a los denominados delitos de mayor impacto, como el homicidio, el hurto, la extorsión y el secuestro, no se pueden olvidar otros asuntos que aparentan ser menores pero que tienen un impacto importante en la ciudadanía. Por otra parte, hay que tener en cuenta postulados internacionales sobre la seguridad humana, según los cuales hay que ir más allá y proteger a la población incluso “contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión”, y, en segundo lugar, “contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad”, señala el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 1994 Nuevas dimensiones de la seguridad humana, elaborado por el PNUD.

Vínculos entre la ilegalidad y la institucionalidad

La gobernabilidad del Huila también se ha visto impactada, como en otras regiones del país, por escándalos de la parapolítica y la farcpolítica. Aunque en el Huila la parapolítica no ha tenido la dimensión de otros departamentos, principalmente porque la mayor presencia en la región ha sido de las FARC, en julio de 2009 la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa al representante a la Cámara por el Huila, Héctor Javier Osorio, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.



Esta investigación se inició en la sala penal de la Corte después de que un ex paramilitar del Bloque Catatumbo de las autodefensas afirmara que Osorio había recibido apoyo de su grupo para la campaña al Congreso de 2001.

Huila fue uno de los departamentos en los cuales se habló de la farcpolítica después de que dos reconocidos políticos del Huila, Carlos Julio Valencia Villa y Luis Enrique Dussán, fueron acusados (el 5 de abril de 2008) de haber tener vínculos y pactos ilegales con esa guerrilla. Sin embargo, el 27 de agosto de 2009, la sala penal de la Corte archivó la investigación preliminar contra ellos.

Estos hechos han provocado un fuerte impacto en la comunidad y, principalmente, han influido en la polarización que se vive en el departamento.

La transparencia y eficiencia del departamento

Una de las principales formas de medir la corrupción en el país es mediante el índice de transparencia departamental (ITD), una herramienta diseñada para identificar las condiciones institucionales y las prácticas de las autoridades gubernamentales y agentes públicos que puedan conducir a elevar o disminuir los riesgos de corrupción. Este índice advierte de la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y prácticas de los funcionarios públicos.

De acuerdo con su más reciente informe departamental, el ITD para la gobernación de Huila en 2006 fue del 62,82, es decir, un nivel medio de riesgo; para 2005 fue de 57,94 y para 2004 de 59,84, sobre la base de que 100 representa un riesgo bajo de corrupción y 0 muy alto, se advierte que aunque la Gobernación en esos tres años se mantuvo en un nivel de riesgo moderado, se mantiene la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción.

Por el contrario, el comportamiento del ITD para la Contraloría Departamental ha sido más positivo. En 2004, la Contraloría del Huila se ubicó en un nivel moderado con un ITD de 79,26, mientras que en 2006 se ubicó en 85,89, es decir, con un riesgo bajo.

Transparencia por Colombia estudió varias entidades descentralizadas del Huila y estableció su IDT, como se indica en el cuadro 4, en el que se observa que, por ejemplo, las secretarías se ubican en un riesgo moderado, mientras que la Empresa de Lotería del Huila está en un riesgo alto de ocurrencia de hechos de corrupción.

Disminuir este tipo de riesgos en el desempeño institucional es una de las áreas pendientes en la búsqueda del desarrollo y el logro del fortalecimiento de la gobernabilidad en el departamento, mucho más si se considera el impacto que hechos de corrupción han producido en la población y en la confianza ciudadana en sus instituciones. Uno de los casos de corrupción administrativa más visible fue el del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano, en el que se comprobó la malversación de fondos y hubo sospechas

Cuadro 4. Índices de transparencia departamental

Entidad / dependencia	ITD 2006	ITD 2005	ITD 2004	ITD 2003
Secretaría de Salud	68,55	62,29	64,56	52,67
Secretaría de Vías e Infraestructura	67,55	62	65,49	27,50
Secretaría de Educación	67,24	62,12	64,73	38,57
Secretaría de Hacienda	64,88	58	65,77	57,75
Inst. de Tránsito y Transporte del Huila	62,40	45,89	43,62	45,05
Empresa de Lotería del Huila	45,79	51,23	47,31	64,41

sobre la posibilidad de que los recursos del hospital se hubieran dirigido a las FARC. El editor investigativo de El Diario del Huila, medio que lo investigó desde 2005, fue amenazado y tuvo que salir de la ciudad. Esta situación produjo que, para seguir la investigación, siete medios de información (Diario del Huila, El Nuevo Día, La Patria, El Espectador, Semana, El Tiempo y Cambio) se unieran en el Proyecto Manizales (PM).

Se encontró un déficit de más de 16.000 millones de pesos y la Fiscalía descubrió (comunicado del 11 de enero de 2007) que el valor de algunos de los contratos irregulares que se realizaron se aproximaba a los 3.500 millones de pesos y la defraudación, a 850 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía (28 de septiembre de 2006) dictó medida de aseguramiento contra el gerente del hospital que estuvo entre septiembre de 2003 y septiembre de 2006 y contra dos contratistas. Un año después (20 de junio de 2007), la Procuraduría regional destituyó e inhabilitó al ex gerente por 14 años y el 31 de enero de 2009 la Procuraduría General confirmó la medida por incremento patrimonial injustificado.

Otras sanciones disciplinarias impartidas por la Procuraduría han impactado local y departamentalmente, tanto por el nivel de los involucrados (un ex gobernador) como por las razones (irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la población vulnerable).

En 2006, fue destituida e inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 12 años Luz Marina Motta Manrique, contralora del Huila; en 2007 la misma medida –pero por 10 años– cobijó al ex gobernador del departamento de Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez. Esta determinación disciplinaria afectó además a una ex secretaria general de la Gobernación y al entonces secretario de Vías e Infraestructura del departamento.

También fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, en 2007, el alcalde del municipio de Altamira (Huila), Gerardo Roa Medina (por 15 años); en 2008, el ex alcalde de Gigante, Diego Fernando Muñoz Bambagué (por 15 años) y el ex alcalde municipal de Garzón, Álvaro Cuéllar Botello (por 11 años), mientras que fue



suspendido e inhabilitado por tres meses (en 2007) el alcalde del municipio huilense de Iquira, Jesús Yamin Perdomo Leiva.

Además, en 2008, un juzgado de Neiva declaró la nulidad de la elección del alcalde municipal de San Agustín para el periodo 2008-2011, Luis Fernando Llanos Pabón.

Por otra parte, estudios sobre el departamento ha evidenciado problemas en la planeación administrativa, en especial relacionados con el manejo de las regalías, como lo señala el estudio de la Contraloría del Huila:

“el departamento del Huila atraviesa por una grave crisis financiera, debido a un considerable desfase en los ingresos de regalías petrolíferas y en general de los recursos propios, especialmente participación de licores nacionales y extranjeros, consumo de cerveza, renta del Monopolio de Licores entre otros, que en gran parte obedece a una inexplicable falta de planeación y de gestión administrativa; que puede desembocar en una nueva descategorización del Departamento al descender de tercera a cuarta categoría. Es esta la oportunidad para que el Gobierno departamental dirija todos sus esfuerzos y tome acciones tendientes a mitigar las consecuencias de la grave crisis por la que atraviesa; sea esta la oportunidad para hacer un llamado para que los recursos con que cuenta se direccionen hacia proyectos bien concebidos que contribuyan a consolidar el desarrollo regional y a mejorar las condiciones de vida de los huilenses¹⁷.

A pesar de que Huila es un departamento que recibe altas sumas de recursos por las regalías, como se dijo anteriormente, esto se ha evidenciado en un mejoramiento de las condiciones sociales.

La participación electoral

En los últimos años, la población ha ido a las urnas para elegir Presidente de la República, Congreso y autoridades locales como rechazo a la confrontación armada y a su interés de incidir de manera directa en la elección de sus más cercanos gobernantes.

Sin embargo, en las elecciones de autoridades locales y del Congreso de los últimos ocho años la participación no ha sido masiva y, por el contrario, ha tenido altos niveles de abstención, como el registrado en 2006, que llegó al 60% (ver cuadro 5).

La votación sí se incrementó en los comicios de 2007 cuando se eligieron autoridades locales y la participación fue de un poco más del 61%, lo que evidencia un mayor interés en la población cuando se trata de definir el destino directo de su departamento, es decir, cuando

17 Contraloría Departamental del Huila. *Op. cit.*

Cuadro 5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL - HUILA					
	2002	2003	2006	2007	2010
Elecciones Presidente	44,29%	-	45,05%	-	-
Elecciones Senado	45,36%	56,30%	40,87%	-	47,80%
Elecciones Cámara	45,34%	56,30%	40,70%	-	46,84%
Elección gobernador	-	56,06%	-	61,73%	-
Elección Asamblea	-	56,30%	-	61,35%	-

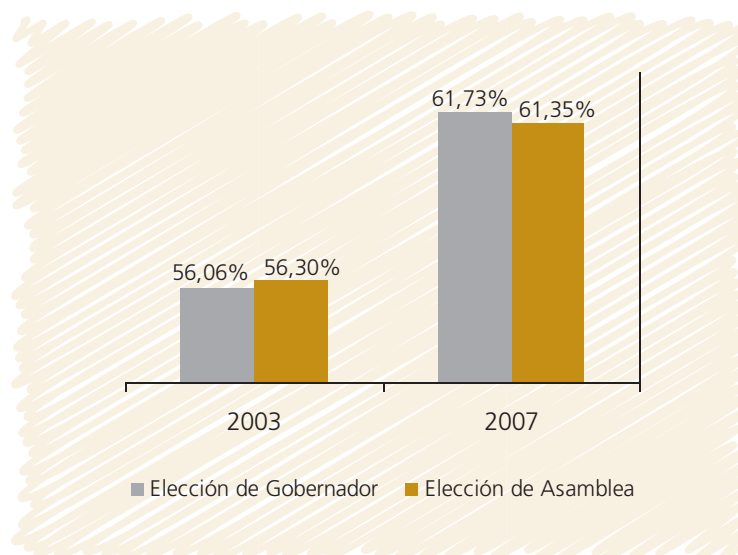
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

son comicios locales (gráfico 4). Por eso, en las elecciones nacionales del 2010 la participación ha sido baja: 46% para elegir Congreso y 50% para escoger Presidente (primera vuelta).

Otro elemento para destacar es que los nuevos gobernantes ganaron pero no con un amplio apoyo popular. Por ejemplo, en 2002, el nuevo gobernador logró solo un 38,17% del total de la votación local, mientras que en 2007 su sucesor consiguió el 49,39%.

Aunque la participación electoral efectivamente aumentó en las últimas elecciones locales –y disminuyó en las nacionales (cuadro 5)–, el nivel de abstención sigue siendo alto; un factor que lo explica, entre otros, es que la acción armada afectó la participación ciudadana en las urnas. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras regiones de Colombia, en los últimos comicios la atención en Huila no estaba centrada en qué tanto los paramilitares influirían en la elección de los futuros gobernantes, sino en qué tanto podría la guerrilla impedir el ejercicio libre del voto.

Gráfico 4. Porcentaje de participación electoral en comicios locales (2003 y 2007)



Por otra parte, sobre la participación femenina en la política, para el periodo 2004-2007 solo 4 mujeres ocupaban el cargo de alcaldesas, 48 concejales (12% de las curules disponibles) y cerca de la mitad de las personerías era desempeñada por mujeres. Según lo señala el plan de desarrollo departamental,

“La participación en cargos directivos era más alta (42,4%), aunque dispar entre entidades descentralizadas y municipios. En 2005, la participación femenina era mayoritaria en los municipios de Timaná, Guadalupe, San Agustín y El Agrado; en 5 municipios ocupaba menos de una tercera parte de los cargos y en dos no tenía participación”.

Impacto del conflicto armado

La acelerada degradación del conflicto es la característica sobresaliente de la situación del Huila en los últimos años, lo que ha tenido un impacto especial en la población en estado de mayor vulnerabilidad, entre ellos mujeres, niños, niñas y jóvenes, campesinos e indígenas.

Aunque algunos de estos indicadores se han reducido en los últimos años (cuadro 6), otros se han transformado y hay nuevas expresiones del conflicto, como los falsos positivos, que han aparecido y generado preocupación, expectativa y aumento de la polarización entre la sociedad civil y la institucionalidad.

Cuadro 6. INDICADORES DE IMPACTO DE CONFLICTO ARMADO EN POBLACIÓN DEL HUILA							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009
Homicidios	611	416	404	398	513	412	171
Casos masacres	1	1	3	2	0	0	0
Homicidios de alcaldes y ex alcaldes	1	1	0	0	0	0	0
Homicidio de concejales	0	1	1	11	1	2	0
Homicidio de indígenas	1	0	0	0	0	0	0
Secuestros	63	75	23	17	8	16	3
Desplazamiento (expulsión)	6.007	4.941	5.360	6.705	9.173	8.776	3.671
Desplazamiento (recepción)	6.373	5.679	7.178	10.094	13.315	10.957	3.262
Minas/Muse (eventos - víctimas)	24/11	27/8	28/20	49/26	32/12	64/28	18/6
Acciones armadas (ataques, hostigamientos, emboscadas, etc.)	23	44	38	30	34	28	15
Contactos armados	18	36	24	64	40	24	5

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009.

Estos mismos efectos han sido provocados por las detenciones arbitrarias de ciudadanos acusados por la fuerza pública de tener algún vínculo con la guerrilla. Posteriormente la mayoría de ellos han sido dejados en libertad por falta de pruebas contundentes. Organizaciones sociales también han denunciado la captura de ciudadanos inocentes luego de haber sido señalados por personas que buscan reducir sus penas y vincularse a programas de reinserción a la vida civil. En muchas comunidades, situaciones de este tipo han provocado un lento proceso de desintegración familiar, comunitaria y social y un grave impacto en el proceso organizativo y en la economía local, ya que muchos son líderes sociales y comerciantes.

Otro factor que ha influido en el clima de tensión en el territorio –tanto en la confrontación armada como en la polarización entre los diferentes actores departamentales– está relacionado con los efectos que tiene en el Huila la aplicación en el sur de Colombia de la estrategia del Gobierno nacional de recuperación social del territorio o Plan Consolidación de La Macarena.

Huila no aparece en las 11 zonas del país –60 municipios– que han sido priorizadas por la estrategia de recuperación social, pero sí están en ella los departamentos vecinos como Meta, Caquetá y Putumayo y varios municipios limítrofes. Hay municipios como Colombia, Tello, Baraya y Algeciras que desde hace meses están bajo operativos militares de gran envergadura, que en muchos aspectos suponen la consolidación de estrategias similares a las aplicadas por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares con su plan de recuperación social del territorio, lo que está teniendo una fuerte incidencia en la población civil.

Como se observa en las dinámicas de los conflictos que padece Huila, todo lo que ocurre a sus vecinos tiene impacto en los huilenses. Así está ocurriendo actualmente y así lo evidencian los indicadores de conflicto armado.

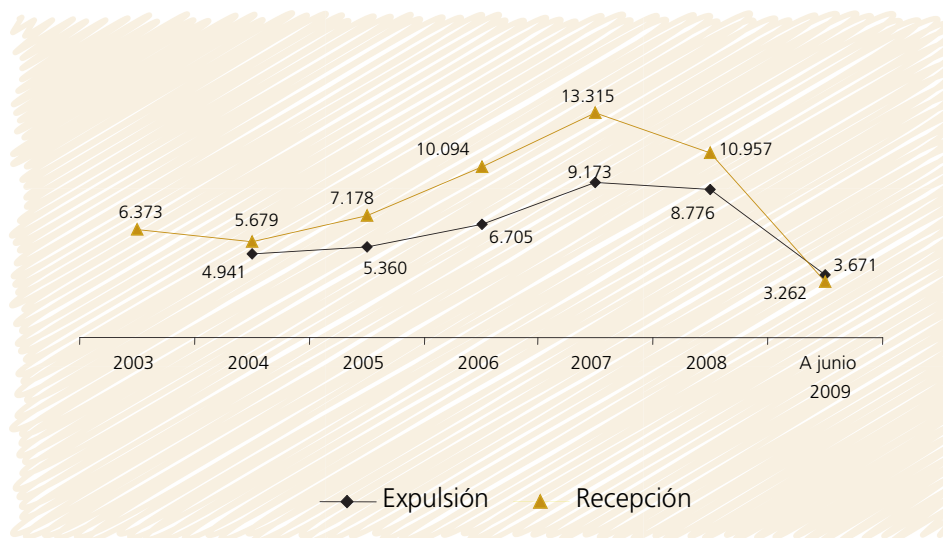
Víctimas del desplazamiento forzado

Una de las consecuencias de la situación social y de la violencia en el territorio –en especial las amenazas, el reclutamiento forzado y los homicidios– es la expulsión de huilenses hacia otras regiones del país. Pero también es un departamento receptor de numerosas poblaciones de departamentos vecinos como Caquetá, Meta, Putumayo y Cauca.

Por eso, tradicionalmente, y como lo muestran las estadísticas de Acción Social (gráfico 5), Huila es más un departamento receptor que expulsor de población en situación de desplazamiento, lo que ha incidido en que haya organizaciones sociales que continúen insistiendo en la necesidad de que esta problemática ocupe un lugar importante en la agenda pública.



Gráfico 5. Desplazamiento forzado en Huila



La dinámica de expulsión y recepción mantuvo una tendencia al alza desde 2004 y la población más afectada son las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes.

Que Huila sea un departamento receptor se explica principalmente por la intensificación de la confrontación armada en los departamentos vecinos, aunque significativa es la participación en el fenómeno del departamento del Caquetá, donde ha habido intensas operaciones militares enmarcadas en la operación JM desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega¹⁸.

También ha influido en el aumento del desplazamiento de poblaciones de otras regiones la presencia de las FARC y de las autodefensas en Putumayo y Meta, la intensificación del conflicto en el sur del Tolima –con operaciones militares como Libertad– y las confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.

Si bien entre 2003 y 2004 disminuyó el número de personas que llegaron al Huila víctimas del desplazamiento forzado, a partir de 2006 se da un incremento significativo, y es 2007 el año más crítico en toda la década (13.315 personas arribaron a diferentes municipios).

Neiva, Pitalito y Garzón reciben el 65% del total de población desplazada que ha llegado al Huila entre 2003 y 2008 (53.596 nuevos habitantes) porque son estos tres municipios –principalmente Neiva por ser la capital– los ejes de desarrollo en la región. Neiva representa el 42% (22.593 habitantes); Pitalito el 14% (7.592) y Garzón, el 9% (4.714).

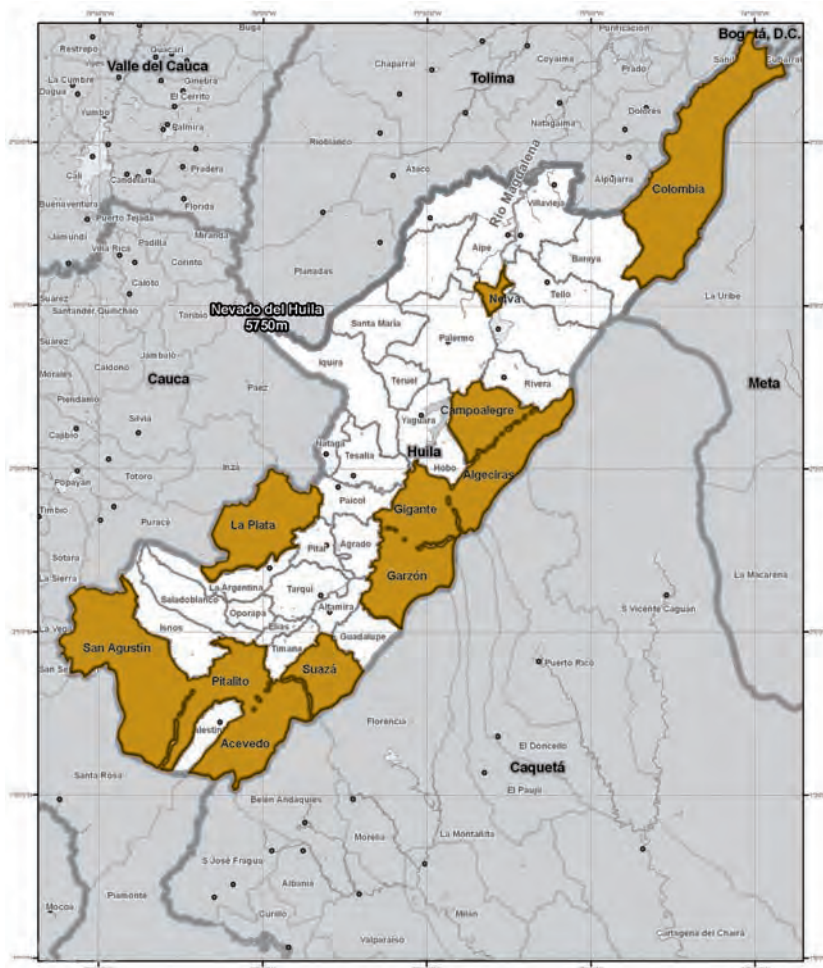
Sobre la población del Huila que ha tenido que huir hacia otros departamentos, las estadísticas también muestran un aumento progresivo a partir de 2005, y son los años 2007 y 2008 los más críticos. El 40,1% de las personas expulsadas (40.962 entre 2003 y 2008) correspondió a los municipios de Algeciras (13,4%, 5.503 personas); Neiva (11,4%, 4.700); Colombia (8,7%, 3.602) y Pitalito (6,3%, 2.621).

18 Vicepresidencia de la República. Diagnóstico del Huila 2003-2008.

“Se advierte que la problemática del desplazamiento forzado se agudiza en los municipios donde la violencia ha sido intensa o que fueron influenciados por la situación de álgida confrontación armada en municipios vecinos”, dice el estudio de la Vicepresidencia, algunos de ellos por la histórica presencia de las FARC (como Algeciras), con ataques y hostigamientos, y por operaciones militares. Además, también se han presentado capturas masivas de ciudadanos acusados de ser integrantes de la guerrilla y con las cuales las Fuerzas Armadas pretendían desarticular la columna móvil Teófilo Forero. Dice el estudio de la Vicepresidencia:

“Estas capturas constituyen un caso de especial interés. Si bien no se tiene un registro exhaustivo sobre el número de personas detenidas, empiezan a aumentar en 2001, llegando a su punto más alto en 2003, cuando se produjeron más de 300 casos, en el contexto de operaciones como Aurora, Margaret y Reflejo”.

Municipios del Huila con el mayor número de desplazados 2008



Municipio	Expulsados	Recibidos
Neiva	1.063	4.229
Algeciras	981	44
Colombia	774	388
Pitalito	682	1.455
Garzón	599	1.007
Acevedo	435	296
Gigante	432	231
La Plata	373	232
San Agustín	313	253
Campoalegre	283	339
Suaza	150	389

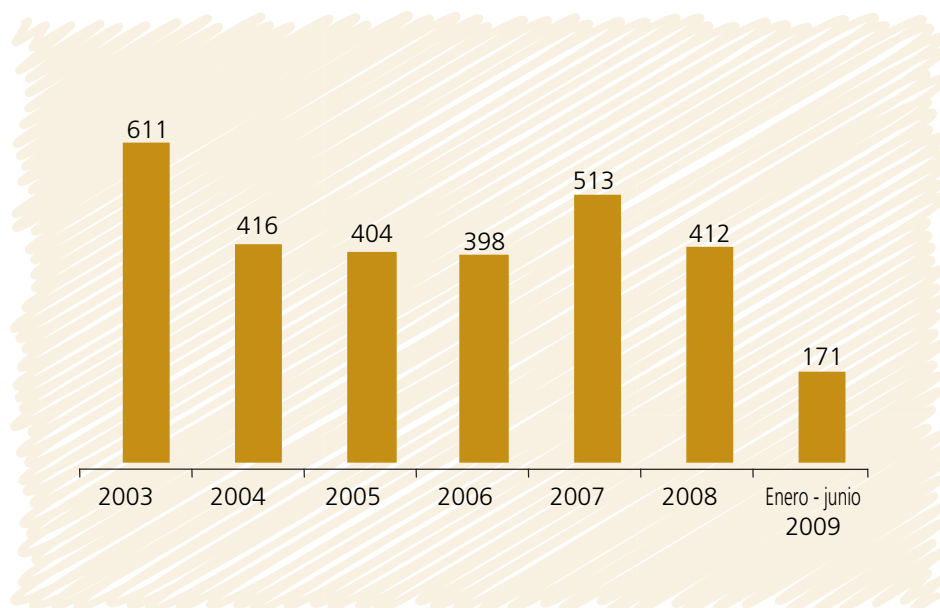
Fuente Vicepresidencia de la República.

Víctimas de homicidios

Estadísticamente, desde 1990 se ha observado en el departamento un aumento de la confrontación armada y, de manera paralela, de los homicidios, situación que se recrudeció en 2002 y 2003. Según el diagnóstico de la Vicepresidencia, en 2003, por ejemplo, de los 37 municipios del Huila, 22 registraron una tasa de homicidios superior a la nacional. En este incremento tuvieron responsabilidad tanto las FARC como los paramilitares. La guerrilla, porque a raíz de la ruptura del proceso de paz intensificó su acción en esa área y en las aledañas contra aquellos a quienes acusaba de haber apoyado a las autodefensas, y estas últimas, porque actuaron de manera violenta contra supuestos apoyos de la guerrilla.

A partir de 2004 (gráfico 6), según las cifras de la Policía Nacional, se dio un descenso de los homicidios, aunque con hechos que han impactado a la comunidad y el país, como el asesinato del ex gobernador del Huila, Jaime Lozada, el 5 de diciembre de 2005, mientras su esposa estaba secuestrada. Sin embargo, la situación volvió a ser preocupante para las autoridades regionales, en especial en 2007, cuando los homicidios aumentaron de manera considerable: mientras la tasa de homicidio nacional fue de 39,2, la de Huila fue de 49,3. Esta situación tuvo que ver, de manera directa, con las elecciones de ese año, época en la cual la guerrilla ejerció una fuerte presión contra las autoridades departamentales y locales y en áreas estratégicas. Por ello, los municipios más afectados fueron, justamente, Algeciras, Gigante, Acevedo y Pitalito.

Gráfico 6. Homicidios en Huila



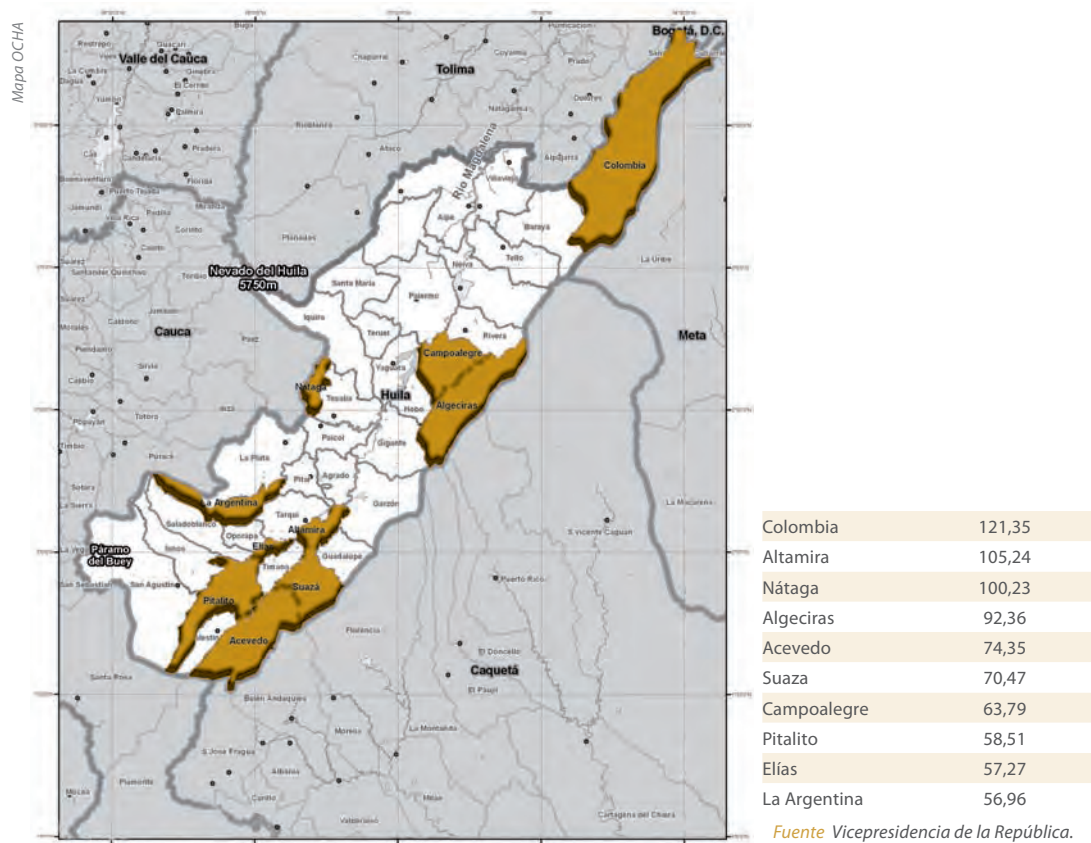
Según la investigación de la Vicepresidencia, lo ocurrido en 2007 también evidenció la necesidad de promover mecanismos para la solución pacífica de las diferencias:

“el motivo más conocido por el que se cometen las muertes violentas en el Huila, se da por problemas personales y/o venganzas, arrojando un total de 156 muertes, siguiendo las riñas con 80, enfrentamiento del ejercito con la delincuencia común con 66, enfrentamiento del ejercito con la subversión con 43, en atracos 27. Es preocupante observar como la mayor parte de los casos de estas muertes violentas se cometen por factores personales ignorando los mecanismos regulares para conciliar estos aspectos”.

Organismos de derechos humanos han advertido sobre la ocurrencia de homicidios por violencia política y social y sobre fenómenos como las campañas de la llamada “limpieza social”. Según un informe del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH) sobre la situación humanitaria del Huila, del 12 de marzo de 2008, en 2007 se registraron 93 casos de asesinato por violencia política y social:

“Se estima que el 15% de las víctimas fueron asesinadas por móviles políticos, mientras que el 30% murió como víctimas de intolerancia social. El porcentaje restante (55%)

Los 10 municipios del Huila con la más alta tasa de homicidios 2008



está muy probablemente relacionado con el resurgimiento de bandas de sicarios y paramilitares al servicio de las redes del narcotráfico especialmente en el sur del departamento y en la ciudad de Neiva”.

A partir de 2008 se ha dado un descenso importante, que para el Gobierno se debe a la política de seguridad democrática.

Víctimas de minas antipersonal

De los 37 municipios del Huila, en 25 se han presentado accidentes e incidentes (llamados eventos) y 12 municipios no se han visto afectados por estos artefactos entre 1990 y junio de 2009, según el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal.

A diferencia de otros departamentos, las FARC han sido señaladas como los únicos actores ilegales que siembran las minas en el departamento.

Aunque en Huila no se registran tantos eventos, estos sí han tenido un impacto importante en la población: 141 víctimas en el periodo 1990-junio 2009, siendo los municipios más afectados Algeciras (con 64 eventos y 47 víctimas); Colombia (con 52 eventos y 22 víctimas), Neiva (31 eventos y 14 víctimas) y Baraya (con 19 eventos y 13 víctimas), según el Programa Presidencial.

La mayoría de las víctimas -como en el resto del país- fueron hombres (135) y muy pocas mujeres (6). Del total de víctimas, 113 fueron militares y 28 civiles. Asimismo, la mayoría fueron mayores de edad (126); entre tanto, 15 víctimas fueron niños, niñas y jóvenes.

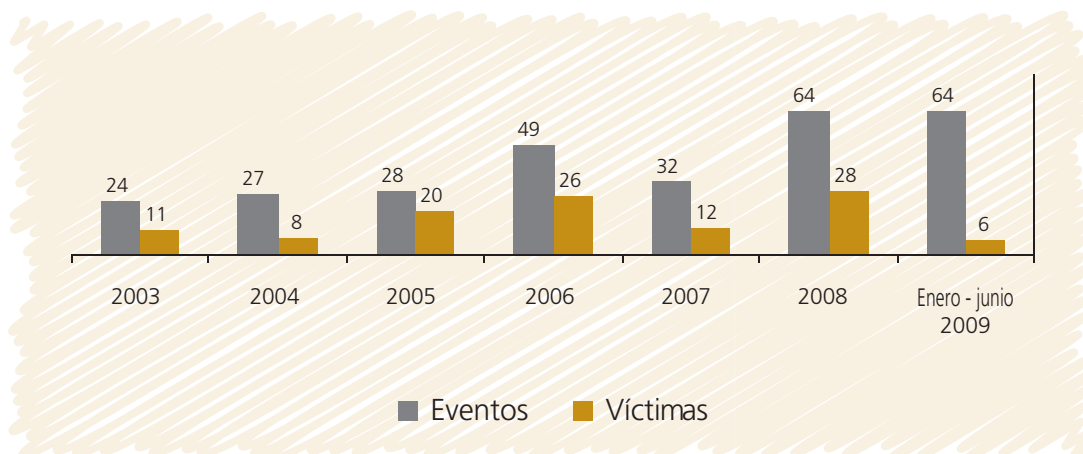
El primer caso de minas conocido en el Huila ocurrió en Algeciras, en 1991, cuando se dieron cuatro víctimas. Este sigue siendo el municipio más afectado en los últimos años, situación que tiene relación directa, según la Vicepresidencia, con las operaciones militares en la zona, como por ejemplo la llamada Halcón Negro, realizada en este municipio y que tenía como objetivo restaurar el orden público. Este aumento de minas coincide además con el incremento en el desplazamiento, como se informó anteriormente.

Es a partir de 2003 cuando se registra un aumento progresivo en el número de eventos y de víctimas debido a la intensificación del conflicto en la región y en los alrededores de lo que fue la zona de distensión (gráfico 7).

A partir de 2008 se observa un crecimiento importante ya que de 2007 a 2008 se duplicó en número de eventos y víctimas en el Huila, especialmente en municipios del norte y el piedemonte amazónico del departamento, como en Colombia, que colinda con uno de los municipios más afectados del país que es Uribe, Meta, y donde se están llevando a cabo desde hace dos años varias operaciones militares, entre ellas la Operación Faraón.

Asimismo, como se dijo, los departamentos alrededor del Huila en donde más se ha recrudecido el conflicto (Caquetá, Meta, Putumayo, Cauca y Tolima) registran un alto nú-

Gráfico 7. Eventos y víctimas por minas en Huila.



mero de eventos y de víctimas por minas, lo cual ha repercutido en Huila, que es receptor de población desplazada.

Así, por ejemplo, Meta y Caquetá son dos de los cinco primeros departamentos del país que en el periodo 1990-2009 registra más eventos y víctimas, ocupando Meta el segundo lugar y Caquetá el cuarto. Entre tanto, los municipios más afectados en Colombia en ese mismo periodo fueron Vistahermosa, Uribe y Puerto Rico, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

En los últimos años se ha mantenido la dinámica en cuanto a víctimas e incidentes relacionados con MAP y MUSE en zonas generalmente asociadas con la presencia o con operaciones militares. Por eso, los militares, como se mencionó, son las principales víctimas. Según testimonios de miembros de las comunidades y de voceros de las entidades, en el último año se ha dado un aumento considerable de campos minados y trampas bomba colocados por las FARC, siendo los municipios más afectados Algeciras, Colombia, Isnos, Garzón, Tello y Guadalupe.

Según el Gobierno nacional, el incremento de minas antipersonal en este departamento se debe a la respuesta de la guerrilla por la política de seguridad democrática y a las operaciones militares, ya que la guerrilla ha recurrido al uso de minas antipersonal para contener a la fuerza pública.

Víctimas de ejecuciones extrajudiciales

Esta es una de las problemáticas que más preocupa a las organizaciones sociales, que han advertido de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, señaló su preocupación sobre esta situación en su más reciente visita a Colombia (junio de 2009), y aunque dijo



que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos, agregó que el número de quejas recibidas evidencia la necesidad de un mayor esfuerzo para evitar este tipo de acciones.

En el caso del Huila, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia hizo un estudio sobre la problemática y encontró que entre 2007 y 2008 se han presentado en el departamento 54 casos que han dejado 104 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En el 2007 se registraron 37 casos con 66 víctimas distribuidas en varios municipios: en Pitalito, 11 casos con 21 víctimas; en Garzón, siete casos, 14 víctimas; en Gigante, dos casos, ocho víctimas; en Acevedo, tres casos, cinco víctimas; en San Agustín, La Plata, Isnos, Tello y Palermo un caso con dos víctimas cada uno; y en Agrado, La Argentina, Neiva, Íquira y Algeciras, un caso con una víctima cada uno. En 2008, entre tanto, se presentaron 17 casos con 38 víctimas: en Pitalito, cuatro casos con nueve víctimas; Acevedo, cuatro casos, nueve víctimas; en Campoalegre, un caso, cuatro víctimas; La Plata, Isnos y Colombia, un caso con tres víctimas cada uno; en Suaza, un caso con dos víctimas y en Íquira, San Agustín y Algeciras, un caso con una víctima cada uno.

Para el Observatorio, los casos ocurrieron por abuso de autoridad, la persecución política y la intolerancia social:

“Las víctimas de esta perversa manera de acabar con la vida son en su mayoría campesinos, líderes comunales, indigentes, drogadictos, personas con antecedentes penales, indígenas, humildes trabajadores; todas inermes víctimas revictimizadas, que para sus victimarios solo significan los 10 o 15 días de permiso y/o el millón de pesos que se paga al que logra presentar un “positivo”, aunque sea falso”¹⁹.

Víctimas de amenazas

La mayoría de las amenazas que se han presentado en el Huila han sido contra candidatos a las corporaciones públicas, maestros, líderes sociales, integrantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. En los últimos meses, las amenazas han provenido de los grupos denominados Águilas Negras, según organizaciones y el Observatorio del Huila.

De la misma forma han causado preocupación en el departamento las amenazas contra prostitutas, basuqueros, ladronzuelos y jóvenes, que han ido acompañadas con “listas negras” de personas, algunas de las cuales han comenzado a aparecer asesinadas. Esta situación –que también ocurrió en otros departamentos, como Nariño y Meta–, se presentó en comunas de Neiva y otros municipios del Huila. “En una iglesia de Pitalito

19 Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia. *Informe de ejecuciones extrajudiciales 2007-2008*.

el párroco fue obligado a leer el panfleto amenazante ante su feligresía. Hay 20 familias desplazadas del municipio de El Hobo porque sus nombres aparecieran en los panfletos”, según el artículo “En el Huila los panfletos van con listas negras”, de mayo de 2009, de la Mesa Humanitaria del Huila.

Esta situación no es nueva. Según el Observatorio,

“entre el 2002 y el 2003 se presentó en el departamento del Huila una de las mas grandes campañas de intolerancia social; para citar un ejemplo tan solo en el municipio de Garzón fueron asesinadas aproximadamente 80 personas en este periodo, lo mismo sucedió en municipios como Isnos Pitalito y Neiva”.

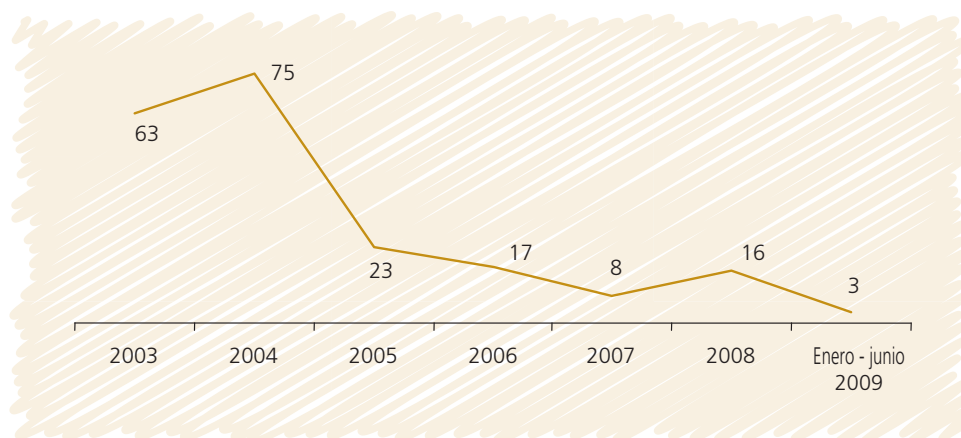
También afirma el Observatorio que, incluyendo 2009, ya son 104 los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a miembros de la fuerza pública en el Huila, que han dejado 104 víctimas.

Víctimas del secuestro

El secuestro y la extorsión son delitos que han afectado de manera especial al departamento en la presente década, aunque en los últimos años se han reducido de manera significativa, según Fondelibertad (gráfica 8). Los actores de estos delitos han sido, principalmente, las FARC.

La etapa más compleja se presentó entre 1999 y 2002, cuando ocurrieron numerosos secuestros y las víctimas fueron llevadas, según la información oficial, a la zona de distensión, utilizando a Algeciras en su recorrido hacia San Vicente del Caguán, en el Caquetá, y a Colombia, hacia Uribe, Meta.

Gráfica 8. Secuestro en Huila



Los años en que más casos ocurrieron en el Huila fueron 2003 y 2004. Entre estos dos años, el 80% de los secuestros se concentró en 14 departamentos, entre ellos Cundinamarca (15%), Antioquia (14%), Cesar (7%), Meta (6%), Cauca, Tolima y Magdalena con 5%, Santander, Valle y Huila con 4%, respectivamente, señala la investigación de 2009 de la Vicepresidencia titulada Dinámica espacial del secuestro en Colombia 1996-2007.

La reducción se ha dado, especialmente, desde 2005 (gráfica 8), tendencia que también se ha registrado en la mayoría de departamentos del país, según el documento.

Para el Gobierno, este descenso en el Huila y el resto del país se debe a la política de seguridad democrática, con sus operaciones militares, la capacidad de reacción militar y el aumento de la vigilancia en los principales ejes viales, lo que impidió que en especial la guerrilla realizara secuestros masivos y retenes ilegales.

Huila es el departamento del país que ha sido la principal víctima de los secuestros políticos por parte de las FARC como estrategia para presionar el diálogo con el Gobierno y un acuerdo humanitario entre los políticos y sus guerrilleros en prisión.

Antes de 2003 se presentaron numerosos secuestros de autoridades locales, y fue 1998 el año más crítico, pues fueron plagiados seis alcaldes (Neiva, Pitalito, La Plata, Oporapa, Saladoblanco e Isnos), un secretario de Gobierno, un jefe de Planeación, cinco funcionarios públicos y dos concejales.

Además fueron secuestrados varios congresistas, algunos de los cuales pasaron más de cinco años en cautiverio, entre ellos Gloria Polanco de Lozada (esposa del ex gobernador del Huila y elegida representante estando en cautiverio) y sus dos hijos; Consuelo González de Perdomo, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Géchem. Precisamente, el secuestro de Géchem fue el detonante para la ruptura de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, en 2002.

El caso más reciente ocurrió en mayo de 2009 con el asalto de las FARC a la alcaldía de Garzón que dejó cuatro muertos y el plagio de un concejal.

5. Escenarios posibles y tendencias²⁰

Agudización del conflicto armado

Desde finales del 2008 se ha producido un cambio importante en la evolución del conflicto armado en la región debido a factores locales, regionales y nacionales, que unido a las fuertes dinámicas de confrontación armada y de violencia en los departamentos veci-

²⁰ Las citas son de las entrevistas realizadas a diferentes actores sociales e institucionales de Huila.

nos (Cauca, Putumayo, Caquetá y Meta) hacen prever un escalada de los conflictos en esta región de Colombia.

Esta situación se agudiza ante el debilitamiento de estructuras familiares y comunitarias, los graves problemas económicos y sociales y el mantenimiento de la exclusión en el ejercicio de poder en diferentes ámbitos de la vida en Huila y algunos departamentos vecinos que inciden en el destino huilense.

El Gobierno nacional mantiene una fuerte presión sobre las FARC, que se manifiesta en la continuidad de operativos militares de envergadura y la presencia de grandes contingentes militares en zonas de presencia histórica de la guerrilla; la aplicación de la política de recuperación social del territorio en zonas de predominio de las FARC; y el debilitamiento de la estructura militar de este grupo ilegal a través de detenciones y muertes de importantes líderes (por ejemplo, la muerte del segundo al mando de la Teófilo Forero, ocurrida en octubre de 2009).

Sin embargo, hay indicios de que la estrategia del Gobierno no ha logrado un pleno afianzamiento, especialmente en algunos municipios del Huila y en zonas limítrofes del piedemonte amazónico. Según las propias comunidades y organizaciones, se estaría dando una sensación en la región de que se ha vuelto a un periodo de equilibrio entre las fuerzas beligerantes, que se rompería a favor de uno o de otro por factores internos (como las políticas del nuevo presidente o la unión de las guerrillas de las FARC y el ELN) o externos (interferencia de países vecinos y aliados al Gobierno como Estados Unidos).

Además, analistas regionales y la propia comunidad aseguran que en las FARC se ha producido una serie de cambios tanto en lo militar como en lo político porque intentan recuperar militarmente corredores y zonas estratégicas y reconquistar sus bases históricas, políticas y sociales. Esto se ha manifestado a través de: a) el aumento del trabajo político de las FARC en sus zonas de influencia por medio de reuniones con la población, en las que impulsan el movimiento bolivariano para dejar atrás para volver a ganar adeptos y superar las críticas por sus vínculos con el narcotráfico y sus infracciones al DIH; b) el incremento de acciones militares para mostrar las debilidades de la política de seguridad democrática (ataques a los concejos de Garzón y Neiva, secuestro y posterior asesinato del Gobernador del Caquetá, ataque a importantes centros militares como los de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, la escalada de atentados en Neiva); c) los movimientos de tropa en zonas donde hace años no había presencia de la guerrilla, como en el sur del municipio de Colombia (en límites con el páramo de Sumapaz), Baraya, La Plata, Isnos, Guadalupe y Garzón; d) las concentraciones de tropas y reclutamiento forzado.

Estos factores harían prever nuevas dinámicas de conflictividad en la región.

- ▶ “En algunas regiones quizá se puede hablar de posconflicto, pero en el Huila es un conflicto armado de alta intensidad con confrontación armada entre grupos armados ilegales y las fuerzas militares y con acciones de la guerrilla todos los días”. Esta es la situación actual que se vive en la región y es el panorama que se



prevé continuará, porque persisten las principales condiciones provocadoras de la conflictividad en el departamento.

La confrontación armada podría agudizarse, además, porque se está a pocos meses de la finalización del actual Gobierno. Por un lado, la guerrilla está liderando acciones diarias para mostrarle su capacidad militar tanto al Gobierno –que insiste en el debilitamiento de la guerrilla gracias a la política de seguridad democrática– como a los candidatos presidenciales. Por otra parte, las fuerzas militares han intensificado sus operaciones en busca de los líderes de la guerrilla de las FARC, con el fin de tener otro triunfo y un nuevo resultado militar importante. La apuesta del Presidente y de la fuerza pública va dirigida en ese sentido, lo que será un factor adicional para que continúe la confrontación armada. Además, persisten las causas catalogadas como estructurales y provocadoras del conflicto.

- ▶ Mientras continúen los conflictos –incluido el armado– en los departamentos vecinos, esta situación seguirá teniendo un impacto en el Huila, como está ocurriendo hasta el momento y se evidencia, por ejemplo, con el hecho de que el departamento sea más receptor que expulsor de población desplazada proveniente de Caquetá, Meta y Putumayo. La tendencia es que se siga presentando esa interdependencia entre los destinos de los departamentos del sur de Colombia.
- ▶ Los megaproyectos, con intereses nacionales y de multinacionales –como la construcción de la represa de El Quimbo y las grandes obras viales previstas (carreteras La Plata – Popayán, San José de Isnos – Popayán y la troncal bolivariana por el Sumapaz que cruzará los municipios del norte de Huila)–, continuarán siendo un factor que profundice y agudice la conflictividad en el territorio, debido a los diferentes aspectos que están en juego: el uso, explotación y distribución de la tierra; la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta en muchos casos sus efectos en las poblaciones, como la campesina e indígena; el desconocimiento de leyes que exigen que en el caso de los indígenas haya una consulta previa para tomar ciertas decisiones; y la consolidación de un modelo económico que desde el ámbito departamental y nacional se está impulsando y consolidando en la región. Otros megaproyectos que se construyen o impulsan en los departamentos vecinos tendrían también un impacto en el Huila, como por ejemplo la mina de oro a cielo abierto o la represa en Chaparral y el megaproyecto hídrico del Triángulo del Sur (Tolima); la explotación petrolera y de nuevas licencias de explotación en los departamentos del sur, como Meta y Caquetá; y la siembra masiva de palma en el Meta. En muchos de estos lugares donde se impulsan megaproyectos, hay una fuerte presencia histórica de la guerrilla y han llegado nuevos actores ilegales.
- ▶ La vía militar como mecanismo para superar el conflicto armado en el Huila continuará teniendo un alto impacto en la sociedad civil tanto en el departa-

mento como en los departamentos vecinos. Preocupan varias tendencias que organizaciones sociales y autoridades han evidenciado:

- ◆ Las minas antipersonal se han convertido en una de las principales armas usadas por la guerrilla para impedir el avance de las fuerzas militares –las víctimas son más militares que civiles– y por eso se prevé que con el aumento de la ofensiva militar la situación continúe. Tal y como lo muestran las estadísticas oficiales, la tendencia es al incremento de eventos (accidentes e incidentes) y de víctimas, no solo militares.
- ◆ La población teme que alrededor de las minas continúen dinámicas como las que se presentan actualmente: la presión de las fuerzas militares para que los habitantes de municipios digan dónde están sembrados esos artefactos. “Si la gente sabe y lo dice, después vienen ellos y llega la represalia”.

- ◆ El reclutamiento en zonas rurales y urbanas es una situación que tiende a continuar por parte de grupos guerrilleros, aprovechando además su presencia histórica en el territorio. Las comunidades indígenas ven con preocupación que esta es ya una constante en la región, fenómeno que se ha hecho evidente porque es un factor del desplazamiento y sobre el cual la familia informa solamente cuando está fuera del territorio.

Sin embargo, esta es una problemática que no está muy visibilizada y sobre la cual hay muy poca denuncia, lo que hace que haya un alto grado de subregistro o desconocimiento sobre la magnitud de la situación.

Una tendencia creciente es el silencio de la familia que ha sido víctima del reclutamiento para salvar al hijo. “Hay mucha presión del Ejército para que la gente diga dónde está la guerrilla. ¿Pero qué familia lo va a decir si allá está el hijo?”

La Personería, la Defensoría y organizaciones sociales han encontrado varias dinámicas alrededor del reclutamiento, entre ellas el adoctrinamiento de los armados a la población civil: “Primero llega la guerrilla con su discurso y después, las fuerzas militares”.

- ◆ Hay una constante y es el aumento del desplazamiento en Huila procedentes de otros departamentos, gota a gota y su ubicación, la mayoría, en zonas periféricas de las ciudades. Varios factores están incidiendo en el aumento del desplazamiento sin que se vea en el futuro un cambio: el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes; la vinculación de esta población en redes de informantes de la fuerza pública y la posterior retaliación guerrillera; la confrontación armada entre Fuerzas Armadas y guerrilla; las relaciones de jóvenes con militares, lo que causa amenazas de las FARC hacia ellas y sus familias; y los efectos de la lucha contra los cultivos ilícitos.

Además de la dinámica de recepción y expulsión de población, se observa con preocupación que la institucionalidad no está preparada ni en personal ni en capacidad técnica ni financiera para enfrentar los nuevos retos. A esto se suma una tendencia de desplazamiento hacia la capital y los centros urbanos en donde hay una mayor presencia de Acción Social. “La gente sabe que tiene más opción de ser atendida



por la entidad, no en la vereda sino cerca de la entidad. Por eso, muchos se están desplazando”.

- ◆ La estigmatización de poblaciones es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones sociales porque muchos ciudadanos siguen siendo acusados o señalados de ser aliados o cercanos a la guerrilla y de actuar en consecuencia. Ante más presencia militar en el área, más se registra dicha estigmatización. “Nos toca hablar con actores a través de intermediarios. Es que la comunidad no puede vivir allí sin relacionarse con ellos. Pero eso no significa que la población sea auxiliadora”.
- ◆ Las estructuras emergentes surgidas después de la desmovilización de paramilitares son una realidad sobre la cual las organizaciones sociales están pidiendo una mayor atención, acciones concretas, el reconocimiento de su existencia por parte de la institucionalidad y de sus diferentes modalidades de acción (como los panfletos o la mal llamada limpieza social) y el castigo de los vínculos de algunos miembros de la fuerza pública con ellas. Asimismo, siguen exigiendo que se actúe de manera integral, pues se parte de la base de que estos grupos tienen negocios con el narcotráfico, pero también tienen intereses alrededor de la propiedad y el uso de la tierra y que buscan debilitar y fraccionar los liderazgos sociales, tal y como hicieron los paramilitares. “Ellos no son bandas, son paramilitares. Los mismos de siempre”.

Una tendencia creciente es que estas estructuras emergentes están aprovechando a las pandillas juveniles y al microtráfico de drogas para sus actividades y el reclutamiento de nuevos miembros. Asimismo, están presionando de diferente forma –amenazas, asesinatos– a los desmovilizados para que vuelvan a ingresar a sus filas.

Analistas, funcionarios públicos, organizaciones sociales y de derechos humanos, medios de comunicación y líderes señalan que en los últimos meses se están presentando acciones relacionadas con la posible expansión del fenómeno paramilitar en el departamento y no de estructuras emergentes, en especial en las cabeceras municipales, como el aumento de amenazas contra organizaciones y líderes y asesinatos selectivos. Consideran que existe una tendencia a diluir dicha expansión del fenómeno en bandas como Mano Negra, Águilas Negras y Nueva Generación, cuando el problema va más allá de ellas.

- ▶ “El narcotráfico existe y es una variable del conflicto que no se puede ocultar”. En el departamento y en la región continúa siendo este un factor determinante en la agudización y continuidad del conflicto. Los cultivos ilícitos continúan, aunque las poblaciones señalan que esa realidad no aparece en las cifras oficiales.
- ▶ Seguirá siendo importante la presencia de la cooperación internacional en el territorio y de agencias y programas del Sistema de Naciones Unidas porque, como lo advierten las autoridades del departamento, “son las únicas que pueden entrar a zonas retiradas y donde hay una presencia muy fuerte de las FARC. Ni siquiera

ingresan las fuerzas militares. En el Huila hay algunas zonas rurales que simplemente son vedadas para nosotros". Ese panorama parece no cambiar en el corto plazo.

- ▶ La invisibilidad de numerosos casos de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –como las ejecuciones extrajudiciales– es una tendencia en la región. Si bien es el tema central de las organizaciones sociales, no lo es de los medios de comunicación y tampoco de importantes autoridades del departamento. "Lo que realmente ocurre acá no sale en los medios". "Hay poca visibilización nacional e internacional sobre los conflictos social, político y militar que se viven en la región, producto de la carencia de medios de comunicación independientes y alternativos que muestren la multiplicidad de conflictos que se presentan a diario en el sur del país, lo que sirve de connivencia para que actores legales e ilegales cometan atropellos y desmanes, sin la correspondiente vigilancia y condena nacional e internacional".

- ▶ La movilización alrededor de la defensa de los derechos a la tierra se prevé que continuará en el departamento por el efecto que tiene su problemática en la población, especialmente en mujeres, campesinos e indígenas.

Uno de los ejes de la conflictividad seguirá siendo la construcción de la represa de El Quimbo, por varias razones: muchos ciudadanos no tienen cómo demostrar la propiedad sobre sus tierras, que son los casos más generalizados en la región; sigue la polémica sobre el efecto de inundar miles de hectáreas aptas para la agricultura con el fin de realizar esta obra y el impacto que ello traerá en la economía de la región y su cultura agropecuaria; y continúa el debate sobre el impacto ambiental de este megaproyecto. También persiste la controversia sobre la real participación ciudadana en los escenarios de deliberación y decisión alrededor de esta obra.

Asimismo, los indígenas han afirmado que continuarán exigiendo que haya una consulta previa para que ellos puedan participar activamente sobre el destino de la tierra y especialmente sobre aquella que está protegida y en la que viven.

El tema de los mecanismos de protección ha tomado relevancia en los últimos meses por el desconocimiento de muchos pobladores sobre cómo defender sus derechos. Por eso se prevé que ese sea un eje en la acción de las organizaciones sociales.

Por otra parte, los campesinos advierten que siguen sin tener herramientas para atenuar su condición de vulnerabilidad, que tenderá a aumentar si no hay soluciones a sus problemáticas y si no se tiene en cuenta a esta población en las decisiones sobre grandes obras de infraestructura,



Posible apertura de espacios de diálogos

A pesar de la dinámica de agudización del conflicto bélico, existen elementos que dejan entrever posibilidades de apertura y de búsqueda de espacios políticos como base para acuerdos de emergencia o humanitarios, los cuales ayudarían, en el corto plazo, a disminuir los niveles de la confrontación. De la misma forma, serían un instrumento para futuros acercamientos de paz.

Dirigentes comunitarios de diversas zonas de la región comentan la posibilidad de que se esté produciendo un cambio en la táctica y la estrategia de las FARC, cambio que vinculan al relevo generacional por la que esta guerrilla está pasando ante la muerte del su líder legendario Manuel Marulanda Vélez y su reemplazo por Alfonso Cano. Según concedores de las dinámicas de esta guerrilla, en ella se estarían abriendo espacios hacia una visión que, sin descartar la lucha armada, comienza a priorizar la necesidad de apertura política para posicionarse en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Además, existen iniciativas y acciones de articulación y movilización social de sectores regionales que, aun en su fase inicial y con problemas, están afianzando modelos de participación real y efectiva de la sociedad civil para generar espacios de análisis, articulación y creación de escenarios de construcción de paz. El objetivo es que se conviertan en actores primordiales frente a posibles acciones que tiendan a la solución de los conflictos armado, político y social, inicialmente desde lo local pero con miras a su incidencia regional y nacional.

Por ejemplo, la movilización campesina de octubre de 2009, con la participación de aproximadamente 12.000 campesinos de Huila y Caquetá, logró, a pesar de sus debilidades, sentar las bases de una mesa de negociación con las Gobernaciones de los dos departamentos y otros entidades del Estado y convertirse en una buena práctica sobre vías de interlocución y resolución de conflictos y de construcción de paz.

Varios factores tienden a amenazar la gobernabilidad y la seguridad

- ▶ La tensión entre la sociedad civil y la institucionalidad tiende a continuar y en algunos casos a aumentar.

Por un lado, hay una fuerte desconfianza –recíproca– de las organizaciones sociales hacia las Fuerzas Armadas que están en el departamento, debido a varios factores: uno, los vínculos de algunos militares con paramilitares, como lo están revelando los desmovilizados. Dos, a los falsos positivos que ocurrieron y se siguen presentando en el departamento y en los cuales militares de los batallones que operan en el Huila y los alrededores tienen cuota de responsabilidad. Tres, por las retenciones –ya no

tan masivas como en el pasado– de ciudadanos acusados por los militares de ser miembros de la guerrilla y que luego son dejados en libertad por falta de pruebas. “No se entiende que dentro de esta población están los abuelos, los padres o los hijos de los guerrilleros que bajaron del Tolima, llegaron al Huila y colonizaron la región. Pero eso no los hace ser, directamente, miembros de esa guerrilla. Y esa es una realidad que no cambiará”. Y cuarto, por el aumento de la presencia militar en el departamento y sus acciones militares, lo que tiene un impacto para cualquier población que esté en medio de ellas. “Hay una confrontación permanente entre la guerrilla y las fuerzas militares por el control de territorio. Son frecuentes los bombardeos y, aunque estos hayan sido muy bien planeados, se presentan daños colaterales, como ellos dicen”. Adicionalmente, la cotidianidad de la población se ha visto afectada por hechos concretos como la imposibilidad de acceder a los alimentos. En algunos municipios, el paso de los mismos se ha restringido ante la estrategia militar de cerrarle el paso a todo lo que sea necesario para la guerrilla. “Seguramente esto ha afectado a las FARC, pero también a nosotros, la población civil”.

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil es la presencia de las fuerzas militares en sus espacios comunitarios y de carácter civil, como las escuelas. Cuando se van, la guerrilla la acusa de ser colaboradora. “Estamos en medio de dos presiones muy fuertes y a nadie le importa”.

“La gran cantidad de militares que llega a un municipio genera la sensación de una toma, ya no guerrillera. Muchas de sus acciones los habitantes las interpretan no contra el enemigo, sino contra ellos”. Varios pobladores y líderes de organizaciones sociales catalogan a los miembros de las fuerzas militares “como ejércitos de invasión”, lo que demuestra la complejidad de la situación.

Por otra parte, hay también una desconfianza recíproca entre organizaciones de la sociedad civil y la institucionalidad debido a varios factores. Uno, a la violación constante de los derechos humanos y la falta de garantías para las organizaciones sociales que defienden sus derechos. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y sindicalistas continúan siendo blanco de acciones de intimidación, amenazas y asesinatos, entre otros, y no sienten que la institucionalidad esté cumpliendo con su labor. “Nuestra dirigencia no es matona, como en otras regiones, sino demócrata, pero no nos está protegiendo”. Dos, a los casos de corrupción que se han presentado en el manejo y destinación de los recursos públicos. Tres, a que los millonarios recursos que recibe el departamento por las regalías no se han traducido en mejores condiciones de vida para sus pobladores. Y cuarto, porque la institucionalidad, entre otros, impulsa y apoya varios megaproyectos que han sido rechazados por sectores sociales por sus impactos, entre ellos los cultivos de palma y la construcción de la represa de El Quimbo.



Asimismo, hay relaciones tensas entre algunos sectores de la sociedad civil e instituciones nacionales que impulsan políticas particulares, entre ellas la recuperación social del territorio, estrategia que han rechazado con varios argumentos. En otros casos, la desconfianza también se ha debido al temor en la población que ha sido amenazada por la guerrilla si participa de alguna forma en dicha estrategia.

Representantes del Ministerio Público cuentan con el respaldo y reconocimiento en el territorio, lo que ha permitido que haya importantes articulaciones entre los diferentes actores. Sin embargo, hay factores que afectan su labor: los pocos recursos, el escaso personal para responder a las necesidades y las exigencias de la región y la estigmatización de la que a veces también son víctimas por ser defensores de los derechos de la población.

Persisten la mayoría de los factores que han sido generadores de la polarización y la desconfianza entre diferentes actores, lo que hace prever que no habrá cambio en el panorama futuro.

- ▶ La población sigue siendo objeto de las acciones de la guerrilla, que la sigue presionando y continúa buscando el control sobre ella. La imposibilidad del Gobierno departamental y de las fuerzas militares de protegerla le ha restando credibilidad a la institucionalidad.
- ▶ A diferencia del pasado, cuando muchos alcaldes del Huila se vieron obligados a huir por las amenazas, presiones o asesinatos de sus colegas, actualmente, como señala la Gobernación, “todos los alcaldes despachan desde sus municipios. El único concejo que no está trabajando es el de Algeciras porque allí mataron a un concejal. Es decir, hay gobernabilidad en todos menos en Algeciras”. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que aunque la situación mejoró, el riesgo persiste y continúa el temor de que la guerrilla intente nuevamente afectar dicha gobernabilidad con actos hacia las autoridades locales.
- ▶ En las últimas décadas no ha sido posible la renovación en la política departamental y no se prevé que dicha situación varíe ante la ausencia, por el momento, de liderazgos que representen intereses o partidos diferentes a los tradicionales. Eso quedó evidenciado en los resultados de las elecciones presidenciales, donde los partidos tradicionales tuvieron una amplia votación.
- ▶ Además del conflicto armado, la institucionalidad enfrenta una situación compleja que tiende a agudizarse: la delincuencia. “Es más fácil salir de la ciudad que salir de la casa”. Esta situación se está presentando especialmente en la periferia de la capital huilense y en otros centros urbanos. Los autores son jóvenes, integrantes de bandas juveniles y emergentes, y pobladores sin opciones que han encontrado en la ilegalidad una vía para resolver sus problemas sociales.

- ▶ La gobernabilidad departamental enfrenta otra problemática que progresivamente se ha agudizado: la difícil situación social y económica de varios sectores poblacionales, que en algunos casos empeoró por la caída de las pirámides, como ocurrió en otros departamentos. Esto ha tenido un efecto en la violencia social. Como se ha mencionado, el conflicto armado, los megaproyectos, el modelo de desarrollo que está predominando y las políticas nacionales tienen un efecto en el desarrollo de la población, efecto que tiende a profundizarse.

Dos ejemplos muestran la tendencia que se percibe en el Huila. El primero, que si bien es cierto que los megaproyectos beneficiarán a amplios sectores de la población, también tendrá efectos negativos en otros, especialmente en aquellos en mayor estado de vulnerabilidad, como los campesinos e indígenas. Y segundo, el impacto del conflicto armado en el desarrollo humano. “Un caso concreto, entre muchos, es que en zonas donde hay una fuerte presencia de la guerrilla, la gente puede vivir, pero no puede sacar sus alimentos”.

- ▶ En las últimas elecciones hubo denuncias, que se están investigando, sobre compra y venta de votos, falta de garantías para el libre ejercicio del voto, constreñimiento al elector y circulación de dineros para cooptar la voluntad popular. Asimismo, se observó una cultura ciudadana que aún no defiende los principales valores de la democracia y que, incluso, a veces desconoce sus derechos y cómo hacerlos respetar. A pesar de los esfuerzos de las autoridades departamentales y nacionales, esta es una realidad que se sigue presentando cada vez que se efectúan unos comicios, y se teme que la historia vuelva a repetirse en las próximas elecciones.
- ▶ La debilidad institucional y de los organismos y escenarios de control y una cultura de la ilegalidad en varios sectores hacen temer que continuarán presentándose hechos de corrupción. “Por ejemplo, aún va el ciudadano a la alcaldía para que le haga un favor, cuando se trata de la exigencia de derechos. Falta mayor formación en la ciudadanía y en las organizaciones sociales”.
- ▶ La participación ciudadana en la toma de decisiones departamentales sigue siendo uno de los grandes desafíos en la gobernabilidad del Huila, en especial por la ausencia de espacios en los que se logren consensos entre las partes sobre temas como los derechos humanos o los efectos del conflicto armado. Por ejemplo, aunque en un principio las organizaciones fueron invitadas a actuar activamente en la formulación del plan de desarrollo departamental, consideran que luego fueron relegadas y que hay otros casos que muestran que no fueron tenidas en cuenta. “¿De qué legitimidad se puede hablar si a las autoridades se les “olvidó” hacer el plan de derechos humanos?”

Como lo señalan algunas organizaciones del Huila, “la construcción de alternativas de poder popular y de gobierno local son bastantes precarias. Las comunidades



y sus líderes no entretejen suficientemente un tejido social que les permita ser decisivas en políticas locales. Sumado a esto existe una clase política burocrática y con altos niveles de corrupción, asociada a diversos sectores de dudosa procedencia, que no permiten que desde el Estado se promueva real y conscientemente este tipo de iniciativas”.

- ▶ Hay una tendencia creciente a promover una cultura de paz en la región en la que sean prioritarios el análisis, la reflexión y los valores ciudadanos, y a que los medios de comunicación tradicionales y alternativos cumplan un rol en el fortalecimiento de la democracia local.

“Lo que pasa en el Huila evidencia la necesidad de abrir espacios para reflexionar y discutir sobre las políticas públicas departamentales; sobre los intereses de los medios, que no siempre pasan por los intereses de la región y de la comunidad; sobre la incidencia pública y sobre la formación en ciudadanía y la construcción de ciudadanía a través de los medios de comunicación”.

Incremento de problemáticas en poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad

La conflictividad en el Huila –expresada en conflictos armados, sociales, económicos, políticos y ambientales– tiende a seguir afectando de manera especial a las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad.

- ▶ **Indígenas.** Esta población sigue siendo objeto de amenazas, intimidaciones y asesinatos; sus miembros están siendo presionados y obligados a ingresar a los grupos armados; en algunas ocasiones sus resguardos han sido militarizados; en sus tierras se han dado enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla; y consideran que hay una estrategia liderada por diferentes sectores locales, departamentales y nacionales –con intereses concretos– de fracturar el liderazgo indígena. “Esa es una tendencia que nos preocupa”.

La situación social que enfrenta esta comunidad ha hecho que muchas de las niñas y mujeres indígenas hayan salido de los resguardos hacia los centros urbanos en busca de trabajo, en la mayoría de los casos en el servicio doméstico. “Los jóvenes también están saliendo para ingresar a las fuerzas militares, no porque eso sea lo que quieren sino porque no tienen opciones y allá cuentan con algunas seguridades económicas: alimento, vestido, sueldo. Estas situaciones están lesionando nuestra cultura, están desintegrando nuestras familias y están provocando el abandono del territorio ancestral”.

Para los indígenas, lo más importante es que han logrado que los armados los respeten. “Hemos sido claros con la guerrilla y las fuerzas militares, y más cuando han pretendido que les paguemos un impuesto o cuando han querido que les hagamos algún trabajo, como limpiar las basuras en las cunetas. Convocamos la minga, nos conectamos con nuestros dioses, hacemos nuestros rituales y mentalmente los expulsamos”. Sin embargo, esta capacidad está en riesgo si persiste la situación descrita.

Sin embargos, hay hechos que temen que vayan a poner en riesgo su cultura y autonomía. “Nos preocupan los estudios para explotación y las grandes obras que se quieren construir. Lo que vemos es que nos quieren sacar de las montañas para explotar los recursos naturales”.

Sigue siendo un grave problema regional y nacional la legalización de resguardos indígenas, así como la invisibilización de la población afrocolombiana en esta región y sus históricos problemas en cuanto a la legalización de territorios colectivos.

- ▶ **Campesino.** Tal y como se ha señalado, el problema que tiende a permanecer y a agudizarse es el de la tierra: adquirirla (en lo que siguen enfrentando serios problemas); legalizar las que ya tienen y cultivarla para su propio sostenimiento y para aportarle a la economía de la región. “Los campesinos seguimos siendo marginales y viviendo en la misma condición de hace décadas. Si no hay transformaciones profundas la situación será peor para nosotros y nuestras familias”.

Aunque en la actualidad existen espacios de negociación generados a partir de las marchas campesinas del 2009, como se dijo anteriormente, existe preocupación en la sociedad de que dichos espacios se deslegitimen y se genere desconfianza si no hay voluntad política que se traduzca en la construcción de planes de acción con apropiaciones presupuestales y se reconozcan a los sectores sociales y la organizaciones como actores legítimos.

- ▶ **Mujeres.** Aún es limitado en la región el reconocimiento de la afectación diferencial de los conflictos en las mujeres, aunque muchas de ellas son el sustento de los hogares, han sido desplazadas y son líderes sociales y activistas importantes en la defensa de los derechos humanos.

La violencia del conflicto también ha afectado sus liderazgos y sus organizaciones, entre ellas las de desplazadas o las que están defendiendo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Persiste una cultura conservadora en la que no se reconoce el rol de la mujer y no se respeta su papel y, también, hay mucho desconocimiento y una falta de auto-reconocimiento. “Denuncian que fueron desplazadas, pero no la violencia contra ella y su cuerpo”.



En la institucionalidad aún persiste el desconocimiento sobre los derechos de las víctimas y, en algunos casos, no se reconocen; por eso no hay medidas efectivas para enfrentar, por ejemplo, casos de violencia basada en género. Los problemas económicos y sociales en el departamento también ha tenido una consecuencia en ellas y por tal razón un eje prioritario futuro son los proyectos productivos.

Estas situaciones tienden a continuar porque aunque se están realizando acciones y la Gobernación, por ejemplo, ha hablado de la creación de una “oficina de la mujer”, aún son insuficientes los esfuerzos.

- ▶ **Niños, niñas y jóvenes.** Tal y como se ha mencionado, esta población está siendo afectada de manera especial por el conflicto, porque son víctimas de desplazamientos, están siendo presionados para que ingresen a los grupos armados o al negocio de la droga o a las pandillas; son víctimas de falsos positivos y sigue sufriendo la estigmatización. “En municipios donde hay una presencia histórica de la guerrilla, y que todos conocemos, todos los pelados son señalados como guerrilleros”. Desde diferentes sectores, los jóvenes son presionados y usados. “En unos casos quieren que seamos informantes. Y en otros, pretenden que seamos botín de los políticos”.

Esta población también está dejando el estudio para buscar opciones laborales y ayudar en el sustento del hogar, o porque sus padres fueron asesinados o por falta de oportunidades.

Hay otra situación que se ha observado en esta población: “el resentimiento hacia las instituciones que, en algunos casos, los ha expulsado a hacer parte de la guerrilla. “Muchos crecieron mientras sus padres estaban en las cárceles acusados de ser guerrilleros porque cayeron en las retenciones masivas realizadas por la fuerza pública”.

Aumentan exigencias de las víctimas y sus organizaciones por sus derechos

La situación de las víctimas se ha convertido en un motor para que las organizaciones sociales lideren procesos, iniciativas y acciones en defensa de una vida digna y de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

- ▶ Hay una tendencia creciente a centrar el trabajo en el ámbito psicosocial ante los efectos que ha tenido el conflicto en las mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes. “Estamos en un proceso para reconocernos y aumentar nuestra autoestima y el valor de cada una de nosotras. Murió el esposo, pero nosotras debemos seguir porque somos capaces y tenemos cómo hacerlo”. Para la mayoría es prioritario un trabajo con los jóvenes antes de que sus sentimientos se manifiesten de manera violenta.

“Hay un espíritu de venganza entre los jóvenes. Están afectados psicológicamente. Y este es un tema prioritario si queremos una Colombia en paz”.

- ▶ La recuperación de la memoria es otro de los temas centrales para que la sociedad no olvide a sus muertos y, especialmente, para volverles a dar el valor que se les quitó cuando se les acusó de ser guerrilleros.
- ▶ Cada vez es más importante en las organizaciones el conocimiento de las herramientas jurídicas para defender y garantizar sus derechos, frente a la debilidad que tienen en la materia.

“Todo está regulado por las normas. Si quiere participar en una audiencia debe saber cómo hacerlo. Si desea presentar una denuncia o una tutela o hacer valer sus derechos necesita conocer los procedimientos o recibir asesoría. Ante el desconocimiento, están siendo víctimas de avivatos. En San Agustín, por ejemplo, les cobraban a las víctimas 350.000 pesos por llenar los formularios de reparación por vía administrativa”.

En otros casos, se ha buscado asesoría jurídica para la protección de las víctimas y para que se tomen medidas inmediatas y efectivas.

- ▶ “Una preocupación constante es que en el sistema judicial local la gente no tiene ni idea qué es verdad, justicia y reparación y, si esta tendencia continúa, las víctimas seguirán siendo la principales perjudicadas”.
- ▶ Hay un interés creciente es sacar adelante en el Huila un plan de acción en derechos humanos desde la verdad, la justicia y la reparación integral y el derecho a la no repetición.

Incremento de la conflictividad y del impacto socioeconómico a raíz del nuevo modelo de desarrollo

El Huila tiene una vocación agropecuaria en la que ha predominado una forma de organización de pequeños y medianos productores que se dedican a la producción agroalimentaria. No hay, como en otras regiones, una industria desarrollada o un empresariado fuerte.

El modelo económico que se está desarrollando en la región –a través de megaproyectos– tiende a tener efectos negativos tanto sociales como económicos y a convertirse en un eje más de conflictividad en la región.

“Se teme que las poblaciones campesinas no tengan donde y qué cultivar, que pierdan sus tierras –adquiridas por otros para grandes plantaciones–, que la gente se vea obligada a desplazarse ya no por culpa del conflicto, sino de la pobreza y la falta de oportunidades”.

En el mismo sentido, las organizaciones señalan que por ser el Huila la entrada al trapezico amazónico, reserva forestal, hídrica y alimenticia, “los megaproyectos amenazan la sosteni-



bilidad de las poblaciones, ya que se avecinan desplazamientos, eliminación de municipios por la construcción de una represa, sin descontar que pueda existir presencia de nuevos actores armados, que aseguren estas megaobras”.

Creciente interés en continuar con esfuerzos de construcción de paz, aumento de tensiones y riesgos

Las organizaciones sociales del departamento del Huila están trabajando activamente para empoderar a los ciudadanos en la defensa de la población que presenta más vulnerabilidad frente al conflicto (campesinos, desplazados, trabajadores sindicalizados, indígenas, etc.)

Sin embargo, producto de su labor, líderes y lideresas están siendo víctimas de acciones de diferentes grupos armados, lo que está provocando su debilitamiento y su fraccionamiento.

“A finales de los 90 el Huila tenía una forma organizativa campesina, sindical y política fuerte y consolidada, pero desde el 2000 la situación ha cambiado por la persecución, asesinatos, amenazas y desplazamiento de líderes indígenas, sindicales, defensores, etc. Esto ha generado un retroceso muy fuerte en el tema de la organización social”.

Aunque se ha dado un resurgimiento de la movilización y la organización social, la tendencia en los últimos años es al no fortalecimiento de los procesos organizativos por el miedo, la desconfianza, la estigmatización, la precariedad socioeconómica y las acciones que contra ellos cometen actores ilegales y también actores desde la institucionalidad.

De la misma forma, se han dado problemas en el interior de las organizaciones, han fracasado intentos de crear redes que las articulen, “a veces hay un sentimiento de que cada uno empuja para su lado”, y no se ven caminos para construir una agenda común.

“Tampoco hay fuertes procesos de articulación entre los diferentes actores sociales y de ellos con la institucionalidad”. Esto ha afectado, entre otras razones, la capacidad de las organizaciones sociales y de la comunidad para tener mayor impacto e incidencia.

Sin embargo, son notorios los esfuerzos de construcción de paz en Huila, los trabajos que desde diferentes ámbitos están promoviendo y el reconocimiento que han ganado las juntas de acción comunal, las asociaciones campesinas y las organizaciones de víctimas, de mujeres, de defensoras de los derechos humanos, los jóvenes y las redes por la defensa de los recursos del departamento.

Huipaz tiene el desafío de fortalecer su liderazgo en la región, de ser un fuerte articulador de las organizaciones sociales, de desarrollar proyectos de la mano con las comunidades y sus líderes y organizaciones y de promover el pluralismo y las decisiones participativas con una representación social amplia. De lo contrario, se correrá el riesgo de perder el liderazgo como PDP.

Existe, además, una gran preocupación: “que haya una lucha por los recursos de la cooperación internacional y nacional que termine por fracturar el movimiento social y que se estén creando parcelas temáticas que ‘pertenecen’ a una u otra organización, limitando, por lo tanto, un trabajo articulado y conjunto para la solución de las problemáticas que afectan a todos”.

6. Identificación de caminos a seguir

Prevención y mitigación de efectos del conflicto

- ▶ Es necesario promover el fortalecimiento y el trabajo de organizaciones, redes y plataformas sociales que están priorizando el análisis, la observación y el seguimiento de temas sensibles a los conflictos en la región, como las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, su evolución, la dinámica de los conflictos y los esfuerzos de construcción de paz. Asimismo, es aconsejable impulsar las capacidades internas de las organizaciones sociales para la construcción de análisis sobre conflictos y desarrollo humano. Esto permitirá que entidades del Estado local, departamental y nacional, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y la cooperación cuenten con información oportuna y actualizada que contribuya a que se tenga un panorama de la situación regional, orientar y tomar decisiones para la incidencia pública y definir las intervenciones en el territorio. Ello ayudará a poner asuntos relevantes de la región en la agenda pública gracias al mayor acceso a la información y el análisis de los diferentes actores estratégicos.
- ▶ Es recomendable impulsar en Huila espacios de reflexión y el uso de herramientas a partir de enfoques de sensibilidad al conflicto con el fin de que las organizaciones sociales e institucionales cualifiquen y optimicen su trabajo de desarrollo y de construcción de paz.
- ▶ Es importante consolidar espacios regionales de análisis, reflexión y concertación colectiva en el territorio que contribuyan a prevenir las causas, disminuir los riesgos y mitigar los impactos negativos del conflicto armado y que fomenten la búsqueda de la paz y el respeto de los DDHH y el DIH.
- ▶ Ante la problemática que enfrentan los y las jóvenes, es imprescindible fortalecer su autorreconocimiento, sus expresiones organizativas y su participación como sujetos activos de su propio desarrollo, creando condiciones para que incidan de



manera efectiva en la vida social, económica, cultural y democrática de sus municipios y del departamento.

En ese sentido, será necesario tener un panorama más preciso de la realidad de los jóvenes y, al mismo tiempo, de la política pública de juventud, con enfoque diferencial, que el departamento ha desarrollado con el fin de mejorar o de implementar una intervención dirigida a esta población. En el mismo sentido, es aconsejable impulsar escenarios de visibilización, encuentro y articulación permanente de las distintas expresiones y organizaciones juveniles por medio de diferentes propuestas e iniciativas.

Transformación de conflictos y cultura de paz

- ▶ La intensificación del conflicto exige aprovechar la experiencia del territorio y promover espacios humanitarios u otras iniciativas regionales como herramientas para la protección de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil y la defensa de sus derechos.

En tal sentido, será necesario contribuir a que dichas iniciativas o espacios cuenten con apoyos de las entidades y organizaciones del orden nacional e internacional para su normal realización y su éxito.

- ▶ Es prioritario impulsar procesos de transformación del conflicto como los llamados acuerdos humanitarios para la solución inmediata de los problemas de la comunidad en el marco de cumplimiento del DIH, tema sobre el cual varias organizaciones vienen trabajando.
- ▶ Es necesario impulsar una visión región-nación sobre las dinámicas culturales, comunicativas y de los medios de comunicación en el conflicto y la construcción social y política de paz en la región.

Es importante trabajar activamente con los comunicadores, colectivos y medios locales y nacionales y promover su capacitación, sensibilización y acción sobre temas relacionados con los conflictos y la construcción de paz.

Ante la diversidad de organizaciones y medios, es recomendable promover espacios de articulación y de generación de información desde lo local y de manera colectiva. Asimismo, es aconsejable impulsar alianzas de comunicadores, medios y colectivos locales y sus pares nacionales para visibilizar y actuar conjuntamente sobre agendas alternativas de construcción de desarrollo, paz y resolución no violenta de los conflictos.

En este mismo sentido, hay que promover una cultura de paz para la región teniendo en cuenta a estos aliados clave y la reflexión y análisis constante –a través

de diferentes herramientas– sobre el quehacer periodístico, su responsabilidad social y el manejo de la información, entre otros aspectos.

Verdad, justicia, reparación y derechos humanos

- ▶ Es una demanda promover y apoyar entidades y entes territoriales en la puesta en marcha y ejecución de la política pública de prevención, protección y atención integral a población desplazada, comunidades en riesgo de desplazamiento y comunidades receptoras.

Esto podría ser posible mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas, la incorporación de nuevas herramientas de gestión pública y el impulso a la activación y fortalecimiento de escenarios como el comité departamental y los comités municipales de atención integral a la población desplazada y los espacios de cooperación nacional e internacional.

Para el trabajo con la población desplazada es imprescindible una labor articulada del PNUD con distintas entidades del Estado y con la Acnur, que tiene sede en el Huila, en el que se tengan en cuenta: a) enfoque y goce efectivo de derechos y superación del Estado de cosas inconstitucional; b) participación real y efectiva, concertación y coordinación de las entidades y organizaciones en los niveles local, departamental y nacional; c) articulación a los planes de desarrollo territoriales y d) apropiación de recursos para su aplicación.

En el mismo sentido, será estratégico contribuir en una formación sobre el tema dirigido a organizaciones de población en situación de desplazamiento, organizaciones sociales e instituciones públicas que trabajan esta problemática. Y, asimismo, será aconsejable promover escenarios de reflexión y análisis que permitan identificar posibles acciones a seguir.

De igual forma, la realidad de la región ha demostrado la necesidad de fortalecer –a través de acompañamiento, asesoría jurídica y otros– las capacidades internas de organizaciones de población desplazada, de mesas municipales y departamentales y de otros espacios que tengan como objetivo el tratamiento de esta problemática. Esto permitirá, a su vez, impulsar una visión colectiva y territorial para garantizar – mediante propuestas, agendas y políticas– una mayor participación ciudadana de esta población y veeduría e incidencia en los ámbitos local, departamental y nacional.

- ▶ Por el papel que cumple el PDP y la apuesta territorial, será prioritario impulsar a Huipaz para que fortalezca en su interior el diálogo directo, espacios de articulación de la sociedad civil, el diseño participativo de iniciativas de planeación y agendas de paz para el desarrollo y la construcción de paz en las regiones, entre otros.



Es necesario, adicionalmente, promover espacios de seguimiento, evaluación, control social y movilización de recursos por parte de Huipaz y otras organizaciones de la sociedad civil.

- ▶ Como aún no es muy fuerte el impacto de organizaciones sociales en decisiones y política pública, es necesario fortalecer las organizaciones, las asociaciones, las redes de la sociedad civil (entre ellas las de mujeres) y a Huipaz en planeación participativa, gobernabilidad democrática local y construcción de paz para lograr su articulación e incidencia real efectiva. Para tal fin será conveniente identificar escenarios clave, como las asambleas municipales constituyentes, los comités locales de agenda, los procesos de la Mesa regional articulada en Huipaz o los consejos municipales de paz, entre otros.
- ▶ Especial atención se tendrá que dar al fortalecimiento de los procesos de auto-reconocimiento de la mujer como actora social y política y sus capacidades para promover el desarrollo de su entorno, especialmente en situaciones de conflicto. En ese sentido, es necesario tener un panorama sobre temas de especial relevancia, como las estrategias y acciones tendientes a la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres en el Huila; impulsar las capacidades internas de organizaciones y redes de mujeres víctimas del conflicto; y acompañarlas en la implementación de acciones de acceso a sus derechos, entre ellos los de la verdad, la justicia y la reparación integral.

En la misma dirección, se deberán fortalecer y articular procesos organizativos con perspectiva de género (como mesas o redes) y la participación activa de las organizaciones y redes de mujeres en espacios de decisión y su incidencia en la formulación y ejecución de políticas, proyectos y planes, como los planes de desarrollo departamental y municipales.

Asimismo, es importante propiciar la incidencia efectiva de la mujer en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales en la región, la visibilización de sus problemáticas y la vinculación de las diferentes instituciones del Estado en acciones dirigidas a eliminar todas las expresiones de violencia contra ellas.

Un trabajo específico se tendrá que efectuar con entidades del Estado de los órdenes local, departamental y nacional en el enfoque de género. Para este trabajo será necesaria una labor articulada del PNUD con Unifem.

- ▶ Es una prioridad fortalecer el sistema de justicia y las instituciones del Estado operadoras de justicia en la región para implementar con éxito rutas de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y niñas en situaciones de violencia basada en género.

Un trabajo especial se deberá realizar con las entidades del Estado encargadas del cumplimiento, respeto, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos huma-

nos y el DIH y organismos y entidades operadoras de justicia para que incorporen el enfoque de género en sus objetivos misionales y en la administración de la justicia. Es aconsejable promover la articulación entre organizaciones sociales, redes y espacios de mujeres y entidades del Estado alrededor de iniciativas de difusión y protección de derechos de esta población.

Este deberá ser un trabajo coordinado entre el PNUD, UNFPA y Unifem.

- ▶ Ante el papel que tienen los medios y redes de comunicación, se requiere promover estrategias de comunicación y difusión sobre la violencia de género en el marco del conflicto, que incluya sensibilización a hombres y niños sobre este tipo de violencia y su eliminación.
- ▶ Es indispensable fortalecer las capacidades internas, redes de apoyo e incidencia política de los procesos organizativos, asociaciones, redes y grupos de víctimas y de derechos humanos de la región en su defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

También es aconsejable acompañar sus esfuerzos de difusión, promoción de los derechos humanos y el DIH y la denuncia de violaciones e infracciones cometidas en la región para que entidades del Estado de los órdenes local, departamental y nacional y organizaciones de la sociedad civil y comunidades cuenten con insumos para el análisis de la evolución de la situación en la región y actúen en consecuencia. Se requiere, además, impulsar mecanismos de articulación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el Huila; herramientas políticas, jurídicas y psicosociales que tengan una visión de integralidad para que las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantías de no repetición tanto individual como colectivamente; y estrategias de protección y autoprotección para disminuir los riesgos de re-victimización.

Esto exigirá fortalecer las capacidades regionales para poner en la agenda pública y visibilizar, ante autoridades, sociedad civil, cooperación internacional y otros actores pertinentes, la evolución de los conflictos y de la construcción de paz en la región.

- ▶ El apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y la academia debe ser una prioridad para promover el acceso de las víctimas a los procesos judiciales. Así, se requerirá impulsar iniciativas, proyectos y estrategias para brindar acompañamiento, atención y asesoría jurídica a las víctimas para la exigibilidad y garantía del goce efectivo de sus derechos y el conocimiento de las rutas de promoción y acceso a los procesos judiciales de verdad, justicia y reparación integral.

Esto demandará también fortalecer los procesos organizativos, de asociaciones, organizaciones y grupos de víctimas y de derechos humanos del Huila y su articulación en redes para promover el acceso de las víctimas a los procesos judiciales y la garantía de sus derechos humanos.



Especial atención se deberá dar a los esfuerzos de organizaciones sociales y campesinas, entre otras, por recuperar la memoria histórica, y trabajar en el apoyo psicosocial a las víctimas.

- ▶ Se requiere impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de instituciones del Estado –personerías, defensorías, Ministerio Público, etc.– para garantizar cumplimiento, respeto, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos y del DIH en la región.

Esto exigirá un trabajo coordinado entre OACNUDH y PNUD en la región.

- ▶ Frente al impacto de los conflictos en la población indígena, es imprescindible fortalecer el Comité Regional Indígena del Huila (Crihu), su articulación interna, sus proyectos y sus pilares fundamentales: unidad, territorio, cultura y autonomía. Se exige impulsar la unidad entre los pueblos indígenas, su presencia territorial, la visibilización sobre su situación ante autoridades, sociedad civil, cooperación internacional y otros actores pertinentes y la promoción de sus problemáticas y soluciones en la agenda pública.

En el mismo sentido, se deben acompañar sus esfuerzos de incidencia en escenarios de construcción de política pública y de construcción de paz en los territorios de su área de influencia.

También hay que responder a sus necesidades (expresadas por el Crihu y la ONIC), con acciones dirigidas a diseñar e implementar un proceso de formación para las autoridades administrativas de los pueblos indígenas, en temas como el Derecho propio o Derecho mayor, jurisdicción especial indígena y gobierno propio y legislación relacionada con ellos.

Esto requerirá promover una estrategia concertada de formación en estos y otros temas entre funcionarios públicos de entidades del Estado y los pueblos indígenas.

Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- ▶ El fortalecimiento de los distintos organismos del Gobierno y del Estado en sus ámbitos de competencia –justicia, derechos humanos, atención a población desplazada, víctimas, etc.– y la promoción de la articulación con organismos y redes sociales contribuirá a la gobernabilidad en la región. Por lo tanto, estas acciones deben ser prioritarias.
- ▶ Hay que apoyar en la región los procesos de veeduría electoral social, gremial y de los medios de comunicación, fortalecer los procesos ciudadanos de observación electoral y contribuir a que haya ciudadanos informados y formados en asuntos públicos.

Es una exigencia territorial promover espacios de análisis y debate en los procesos electorales sobre la transparencia y legalidad de los procesos democráticos locales, así como escenarios de deliberación pública con aspirantes a los cargos de elección popular, con aquellas organizaciones dedicadas a la observación y la veeduría electoral.

- ▶ Es una prioridad fortalecer el diseño, implementación y evaluación de los procedimientos técnicos, administrativos y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades y ejecución de los proyectos de Huipaz, teniendo en cuenta para ello sus objetivos misionales.

Esto permitirá que Huipaz implemente un modelo de planeación, monitoreo y evaluación sustantiva y financiera, que incorpore herramientas de gestión y seguimiento de proyecto y que fortalezca alianzas interinstitucionales, modelos de intervención y funcionamiento descentralizado para garantizar la participación activa y con incidencia de los actores del territorio.

- ▶ Por el rol histórico que las asociaciones de juntas de acción comunal han tenido en la región, es imprescindible fortalecer sus capacidades internas para el desarrollo integral de las comunidades y sus iniciativas de construcción de paz.

Esto implicará impulsar sus mecanismos de articulación interna y capacidad organizativa, la formación de sus miembros y, además, escenarios de reflexión para un desarrollo propio, autosostenible, autónomo y incluyente y articulado con instituciones, ONG y programas de la sociedad civil.

De la misma forma, será inevitable impulsar la participación de estas asociaciones en espacios de interlocución y concertación con entidades del Estado de los ámbitos local, departamental y nacional, con organizaciones de la sociedad civil y comunidades sobre diversos temas, entre ellos las agendas políticas campesinas, los modelos de desarrollo sostenibles alternativos, las iniciativas y acciones de paz y las alternativas de desarrollo social.

Desarrollo social económico sostenible para la paz

- ▶ Por la conflictividad que están provocando en la región los megaproyectos, es una exigencia ayudar a posicionar en la agenda pública la discusión y concertación de modelos de desarrollo y sobre soberanía, seguridad y autonomía alimentaria a nivel regional.



Esto demanda, al mismo tiempo, que las redes sociales estén informadas, empoderadas y organizadas para que participen activamente en los escenarios de deliberación y en la formulación concertada de planes de desarrollo local y regional humano sostenible, para lograr una real incidencia.

- ▶ Hay que responder a la demanda creciente de la población de formular e implementar proyectos de desarrollo en territorios priorizados, que sean autosostenibles, replicables, demostrativos de modelos económicos alternativos viables y que puedan incidir en políticas públicas.
- ▶ Se requiere proveer financiamiento de capital semilla, impulsar el acceso a microcréditos o fondos rotatorios y brindar asistencia técnica a proyectos de mediana o pequeña escala demostrativos de modelos económicos sostenibles alternativos.
- ▶ Es aconsejable apoyar pequeñas iniciativas productivas con el objeto de fortalecer la organización y autosostenimiento de procesos de desarrollo y construcción de paz regionales y su articulación con entidades del Estado y agencias nacionales o internacionales de cooperación.

En esa línea, será necesario que entidades del Estado y la cooperación nacional e internacional apoyen e implementen acciones para el fortalecimiento y consolidación de las iniciativas de desarrollo sostenible y medioambientales promovidas por las comunidades.

- ▶ Hay que ayudar a implementar una estrategia integral de desarrollo y paz con las organizaciones sociales de la región (víctimas, campesinas y campesinos, etc.) por medio de un acompañamiento técnico y financiero y el fortalecimiento de los procesos de autodesarrollo y autonomía de las comunidades.
- ▶ Es una demanda promover espacios entre organizaciones campesinas y otras poblaciones excluidas y entidades públicas para ampliar y restituir el acceso, el uso y el control de tierras y otros activos productivos y promover medidas, iniciativas y políticas sobre la problemática.
- ▶ Es imprescindible que haya una articulación entre la Oficina Territorial y el equipo del Informe Nacional de Desarrollo Rural sobre temas relacionados con el desarrollo rural sostenible, teniendo en cuenta que ese es el tema principal que tratará el próximo informe nacional.

El propósito de la estrategia ART - REDES es promover condiciones y ambientes propicios a la búsqueda de la paz en Colombia.

En estos años de trabajo, la intervención territorial se ha focalizado en los Montes de María, Meta, Oriente Antioqueño, Nariño y Huila y Piedemonte Amazónico. Desde el 2009, también está en Cesar.

Son cuatro los ejes de esta estrategia, que hacen referencia a las cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo humano:

- Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz
- Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos
- Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
- Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz

